

# capítulo

# 3

## EL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

**L**a necesidad de instrumentos que den respuesta a la protección social de millones de personas, es el hecho que se sitúa en el fundamento de la decisión adoptada y ratificada en las reuniones de las Conferencias de Ministros y las Cumbres Iberoamericanas, que quedó plasmada, en forma muy precisa, en la V Conferencia Iberoamericana de Ministros/Máximos Responsables de la Seguridad Social, celebrada en Segovia (España) en septiembre de 2005, en donde los representantes de los 21 países asistentes acordaron por unanimidad **«iniciar el proceso de elaboración de un Convenio Multilateral de Seguridad Social de la Comunidad Iberoamericana»**, **«que en el menor plazo de tiempo posible, permita contar con un instrumento único de coordinación de las legislaciones nacionales en materia de pensiones que, con plena seguridad jurídica, garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos»**. Iniciativa que fue acogida y refrendada por la XV Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Salamanca en octubre del mismo año y ratificada en el denominado **«Compromiso de Montevideo»** suscrito por los máximos mandatarios iberoamericanos en la XVI Cumbre, de Uruguay, en noviembre de 2006, en el apartado 25.K), cuando, entre tales compromisos, se incluyó el de: **«Adoptar las medidas necesarias para la pronta y adecuada puesta en vigor del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social y fomentar acuerdo en esta materia, con el objetivo de que los**

***migrantes puedan gozar, en sus países de origen, de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores».***

Tal es el origen y la base de la elaboración de un Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social que ha constituido un punto esencial de la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar en Santiago de Chile los días 8 a 10 de noviembre y que, en esta ocasión, tuvo como tema central **«Cohesión Social y Políticas Sociales para alcanzar sociedades más inclusivas en Iberoamérica».**

La Declaración de Santiago en su Punto 8, textualmente expresó: **«...y en cumplimiento de los acuerdos de la XV y XVI Cumbres Iberoamericanas, los países miembros adoptan en esta ocasión el texto del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social y se comprometen a impulsar los procedimientos internos para su pronta entrada en vigencia. Asimismo, acuerdan instruir a sus representantes técnicos para que inicien a la brevedad la negociación del Acuerdo de Aplicación».**

Asimismo, el Programa de Acción derivado de la citada Cumbre, en su Punto 31, incluyó: **«Acordar la puesta en marcha de la Iniciativa de Cooperación Iberoamericana» “Implantación y Desarrollo del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social (IDCISS)”, gestionada por la SEGIB y la OISS, para permitir la pronta entrada en vigencia de dicho Convenio Multilateral así como, la promoción y coordinación de la negociación de su Acuerdo de Aplicación».**

El Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, en cuyo desarrollo la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) han puesto todo su empeño, dando cumplimiento a la solicitud de apoyo formulada por la Conferencia de Segovia y con la eficaz colaboración de cuantos han intervenido en las Reuniones Técnicas celebradas a lo largo de este proceso, en Montevideo en octubre de 2006, en Santiago en abril de 2007 y en São Paulo el pasado mes de junio, y en la VI Conferencia de Ministros celebrada en Iquique, en julio de 2007, sin cuyas aportaciones y sugerencias, unidas a las realizadas por escrito a los distintos borradores manejados y distribuidos, no hubiera sido posible lograr el pleno consenso técnico que hoy nos sitúa en esta fase del proceso.

El texto articulado de Convenio, aprobado por la VI Conferencia de Ministros, celebrada en Iquique (Chile), los pasados 5 y 6 de julio, y que ha sido aprobado en la XVII Cumbre, tiene en cuenta los principios

básicos que la V Conferencia recogió en su documento final, ratificado por todos los países de la Comunidad Iberoamericana, que se reunieron en Segovia: **igualdad de trato**, determinación de **campo de aplicación personal y material**, **sometimiento a la legislación nacional** del país en que se realiza la actividad laboral, **garantía de los derechos adquiridos** (exportación de las pensiones contributivas), **colaboración administrativa y técnica** entre instituciones, **vigencia de los convenios bilaterales y multilaterales en vigor** en la medida de que sean más favorables, necesidad de **elaboración de un Acuerdo Administrativo de Aplicación** y posibilidad que por acuerdo de los países pudiera ampliarse el campo material de aplicación en un futuro.

El Convenio establece que se deberán **tener en cuenta los periodos de cotización realizados en todos los países iberoamericanos**, **al determinar el derecho a la pensión**, **garantizándose así que no se pierda ningún esfuerzo y derecho contributivo del trabajador**.

Las cotizaciones a la Seguridad Social que una persona realice en dos o más países de la Comunidad Iberoamericana se sumarán cuando se solicite la pensión de jubilación, invalidez, viudedad u orfandad, de modo que tenga asegurado el derecho que se va perfeccionando a lo largo de la vida laboral al considerar todos los periodos cotizados, **tanto para determinar la cuantía de la pensión, como para cumplir los requisitos de exigencia de tener un periodo mínimo de cotización**.

El Convenio prevé, igualmente, que **la pensión que genere una persona que haya trabajado en varios países de Iberoamérica pueda cobrarla en cualquiera de ellos en el que resida**.

Asimismo, el Convenio **promueve la cooperación administrativa entre los sistemas de Seguridad Social en todo lo relacionado con el derecho a las prestaciones del trabajador migrante**, tanto en materia de información como de gestión, para evitar perjuicio por retrasos o descoordinación de las entidades especializadas que afectasen al ejercicio de su derecho.

Como garantía de aplicabilidad del Convenio y, por tanto, en defensa de sus derechos en materia de pensiones, una vez esté en vigor en los respectivos países, **cualquier ciudadano iberoamericano podrá acudir a los tribunales ordinarios para reclamar la aplicación de Convenio**.

El Convenio trata de evitar, desde la perspectiva de los derechos sociales, los riesgos que en materia de pensiones conllevan los movimientos migratorios para los ciudadanos, puesto que el



*XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, Santiago de Chile, del 8 al 10 de noviembre de 2007.*

trabajo fuera del propio país al que se pertenece dificulta, en muchos casos, el mantenimiento de esos derechos. La diversidad de modelos y la descoordinación entre los sistemas nacionales que impide computar los periodos cotizados en un sistema distinto a aquel en que se produce la contingencia, así como la exigencia de aportaciones y contribuciones por un periodo mínimo para generar derechos contributivos (periodo de carencia) provocan que, en muchas ocasiones, no pueda perfeccionarse el ejercicio del derecho a una prestación, lo cual hace más vulnerable a la sociedad frente a las contingencias sociales.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) seguirán realizando, los máximos esfuerzos para que el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social tenga plena efectividad en nuestros países, a través de la ratificación del Convenio, incluyendo la elaboración y negociación del Acuerdo de Aplicación del Convenio, en el ámbito de la Comunidad Iberoamericana.

La entrada en vigor del Convenio Multilateral se supedita a la ratificación de al menos siete de los países que forman la Comunidad Iberoamericana.

De esta forma **el Convenio Multilateral se constituirá en un instrumento que protege a los derechos sociales de los trabajadores migrantes y sus familias, contribuyendo a la creación de una conciencia ciudadana iberoamericana** que vela por el mantenimiento de sus derechos en este ámbito de la Seguridad Social, y con el que se podrán beneficiar hasta seis millones de trabajadores iberoamericanos que laboran fuera de sus países de origen.

De hecho, el Convenio Multilateral es, mundialmente, el instrumento más amplio en Seguridad Social, ya que la Comunidad Iberoamericana asciende a más de 600 millones de personas.

La OISS desarrollará un especial papel en relación con el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad social, pues de acuerdo con el texto aprobado por la XVII Cumbre Iberoamericana, se le encomiendan importantes funciones, junto a la SEGIB, en el impulso y seguimiento de su aplicación.



*Edición en español del Convenio Multilateral Iberoamericana de Seguridad Social realizada por la OISS (2008).*



*Edición en portugués del Convenio Multilateral Iberoamericana de Seguridad Social realizada por la OISS (2008).*



## 1. DECLARACIONES DE MINISTROS DE TRABAJO SOBRE EL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

A continuación se incluyen las declaraciones de los Ministros de Trabajo de los tres países anfitriones de las últimas Cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno (XV, Salamanca) (XVI, Montevideo) y (XVII, Santiago de Chile), impulsoras del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, ordenadas cronológicamente.

### 1.1. “La consolidación del derecho a la Seguridad Social de los ciudadanos de Iberoamérica” (enero 2008)

*Jesús Caldera*

*Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de España*

Desde la celebración de la I Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en 1991, la consolidación de los sistemas de Seguridad Social ha sido una de las principales preocupaciones manifestadas en las Declaraciones Finales de los sucesivos encuentros, así como de las Conferencias de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social. La aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social en la última Cumbre, que tuvo lugar en Santiago de Chile en octubre de 2007 y que tiene su origen en una iniciativa del Gobierno de España recogida en la Cumbre de Salamanca de 2005, supone la culminación de los trabajos realizados a lo largo de estos años; una labor que ha partido del convencimiento de que la Seguridad Social constituye un medio fundamental para mejorar la cohesión social y favorecer un desarrollo equilibrado tanto de las sociedades de los países integrantes de la Comunidad Iberoamericana, como de la propia Comunidad.

En efecto, este Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social tiene una enorme trascendencia política en cuanto que fortalece el pilar social de la Comunidad Iberoamericana y además da respuesta a dos de los grandes desafíos que todos los países miembros de dicha Comunidad hemos de afrontar en los próximos años. Se trata, por un lado, de la pobreza y la desigualdad, problemas a los que la experiencia demuestra que se hace frente de forma más eficaz a través del desarrollo de sistemas de protección social.

Y, por otro lado, el Convenio también sirve para hacer frente al reto de la globalización y a las implicaciones del fenómeno migratorio que ésta

lleva aparejada. En este sentido, el imparable proceso de globalización de la economía, de la apertura comercial, de la circulación de capitales y de la interdependencia entre países debe conciliarse con el objetivo propugnado por la OIT en su informe “Por una globalización justa: crear oportunidades para todos” de preservar la dimensión social de ese proceso globalizador, es decir, mejorar el bienestar de la población en términos de libertad, prosperidad y seguridad. Téngase en cuenta que todas las sociedades de la Comunidad Iberoamericana son emisoras, receptoras o ambas cosas a la vez de trabajadores de otros países; así, hoy son alrededor de seis millones de personas quienes podrán beneficiarse de las previsiones de este Convenio, pero el previsible incremento de la movilidad de trabajadores, como consecuencia de la citada globalización, asegura un campo de aplicación mucho más amplio en un futuro cercano. La fórmula diseñada para hacer frente a ambos desafíos consiste en coordinar las legislaciones sobre Seguridad Social de los distintos países de la Comunidad Iberoamericana, de manera que, preservando las normativas nacionales, se da cobertura a los trabajadores migrantes y a sus familias, y se garantiza el derecho a las prestaciones económicas de Seguridad Social en sus desplazamientos dentro de ese espacio iberoamericano. Todo ello, sin perjuicio de la aplicación preferente de otras previsiones más favorables contenidas en convenios bilaterales.

De este modo, se logra un doble objetivo de gran impacto social: primero, incrementar el grado de protección social de los trabajadores, garantizar que conservan sus derechos aunque su carrera laboral se desarrolle en distintos países, lo que repercute positivamente en la cohesión de las sociedades iberoamericanas; y, segundo, mejorar la calidad del empleo, un “trabajo decente” que sirve para satisfacer de forma efectiva las necesidades económicas y familiares básicas porque es un acicate para la reducción de la informalidad, lacra que afecta particularmente a las mujeres.

Como instrumento de coordinación de las legislaciones nacionales sobre Seguridad Social que garantiza los derechos de los trabajadores migrantes y de sus familias, el nuevo Convenio se aplica a las prestaciones económicas de “invalidez”, “vejez”, “supervivencia”, así como a aquellas derivadas de “accidentes de trabajo y de enfermedad profesional”. Y su articulación se inspira en los siguientes principios básicos: primero, la igualdad de trato, garantizando a los trabajadores migrantes las mismas condiciones que a los nacionales del Estado receptor; segundo, la totalización de los periodos de cotización en cualquiera de los Estados de la Comunidad, asegurando una prestación futura a los trabajadores que desarrollan su actividad en distintos países iberoamericanos; tercero, la conservación de los derechos adquiridos con el consiguiente pago de las prestaciones, sin perjuicio de los cambios de Estado de

residencia; y, por último, la garantía de la revalorización de las pensiones, cuando así esté prevista en la legislación de uno de los Estados en los que se haya trabajado.

En suma, la firma del nuevo Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social es un acontecimiento de la máxima relevancia para la Comunidad de Iberoamérica en su conjunto, por cuanto refuerza la dimensión política del espacio iberoamericano, facilita la cooperación, especialmente en el ámbito sociolaboral, entre todos ellos y con ello la capacidad colectiva para hacer frente a los retos futuros. Y es igualmente muy relevante para cada uno de los países miembros de ella, para sus instituciones y para sus poblaciones, en la medida en que impulsa el desarrollo económico, favorece la inclusión social, perfecciona los derechos de los trabajadores e incrementa el nivel de bienestar de los ciudadanos. Es el primer paso para dotarles de derechos como ciudadanos iberoamericanos independientemente de su origen o lugar de residencia. Constituye, por lo tanto, un hito en el camino para dotar de rostro humano a la globalización.



*El Ministro de Trabajo de España, don Jesús Caldera presenta con el Secretario de Estado de Seguridad Social, D. Octavio Granado y con don Adolfo Jiménez, Secretario General de la OISS, el Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social. (Madrid, diciembre 2007)*



## 1.2. “Diez reflexiones ante la aprobación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social” (diciembre 2007)

*Eduardo Bononi*

*Ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay*

*Dr. Jorge Bruni*

*Viceministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay*

“Bienvenida la aprobación en Santiago de Chile, en noviembre de 2007, del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Por varios motivos:”

1. Porque contribuye a promover un proceso de consolidación del espacio iberoamericano desde la perspectiva de la diversidad.
2. Porque en épocas de plena globalización, de creciente interdependencia entre países y regiones y de mayor movilidad de personas, es cuando más se advierte que el trabajo y la seguridad social son conceptos centrales de cualquier sociedad que pretenda la equidad, la cohesión social y la gobernabilidad democrática. El Convenio recoge a través de varias de sus disposiciones ese objetivo. En definitiva, se refleja la naturaleza de Derechos Humanos Fundamentales del Trabajo y la Seguridad Social.
3. El fenómeno migratorio, que constituye una de las motivaciones fundamentales del Convenio Iberoamericano no es un proceso lineal sino más bien de ida y vuelta, o al menos así debería serlo. Casi dos siglos de historia independiente de nuestro continente lo demuestran. Por otra parte es por demás complejo, con aristas varias que deben analizarse en profundidad.

Nos implica a todos, se intensifica y diversifica, se decía en Salamanca, estableciéndose en el punto 7 de la Declaración Final: “las migraciones involucran en forma intensa, diversa y compleja a todas las sociedades por sus consecuencias en la configuración política, económica, social y cultural de las mismas, razón por la cual se considera conveniente el diseño de un marco normativo para canalizar adecuadamente los flujos migratorios”.

4. Una de las facetas del fenómeno es resaltada claramente a través del convencimiento expresado por los Ministros de Trabajo Iberoamericanos, posteriormente ratificado por los Presidentes, referido a la importancia de adoptar políticas sociales y económicas adecuadas para el encare del problema. Porque así como existe un derecho a emigrar, también debe respetarse el de quienes no quieren hacerlo, lo cual general responsabilidades de los gobiernos que deben crear las condiciones para que ello no suceda. De ahí la importancia del Trabajo

Decente y de la imprescindible articulación de políticas varias para lograrlo. En Salamanca se hacía referencia al tema: “políticas para un desarrollo sostenible y combate a la pobreza y desigualdad”.

5. Lo expuesto precedentemente no significa restarle importancia a la imprescindible coordinación normativa que asegure la protección de los derechos laborales y de seguridad social. En este último caso: los principios de igualdad de trato, conservación de los derechos adquiridos o en curso de adquisición de los trabajadores migrantes y de quienes de ellos dependan. Todo lo cual contribuirá a mitigar el drama que significa el desarraigo, la vulnerabilidad social, las dificultades de inserción laboral, etc.
6. El Convenio concreta la voluntad de los Ministros de Trabajo en el sentido de la urgencia de contar con un instrumento de coordinación de las legislaciones nacionales, a lo que agregamos su plena vigencia en la práctica. Por ello, es importante lo que han dicho en cuanto a la necesidad de iniciar el proceso de negociación del Acuerdo de Aplicación del Convenio Iberoamericano de Seguridad Social que permita su puesta en vigencia, y la solicitud de colaboración a la OISS a tales efectos. Lo que se ratifica con el compromiso que asumen de “impulsar los procedimientos internos para su pronta entrada en vigor”.
7. Más allá de políticas que se están instrumentando por los distintos países, es indudable que el fenómeno migratorio persiste, tornando indispensable la protección de los derechos humanos socio laborales, maximizando así la contribución de la migración al desarrollo, previniendo, por otra parte, la de naturaleza clandestina.  

Se estima en más de 20 millones los latinoamericanos que viven fuera de su país, y unos 40 millones de dólares el monto de las remesas. Ello en un total mundial de aproximadamente U\$ 236 millones, de los cuales U\$ 167 pertenecen a países en subdesarrollo.

Más allá de posibles imprecisiones en las cifras, en cualquier caso las mismas son mayores a los niveles actuales de ayuda oficial de todas las naciones donantes en conjunto.
8. Si bien resulta indudable la necesidad de garantizar el derecho individual de los migrantes a disponer de las remesas hacia sus países, familiares, etc. Lo que sin duda contribuye a la reducción de la pobreza, al menos familiar, ello no excluye la responsabilidad de los gobiernos en generar las políticas para garantizar el derecho de quienes no quieren emigrar, fundamentalmente en aquellos estados en que el fenómeno se acentúa fuertemente.
9. Los Ministros se han pronunciado acerca de la necesidad de poner en marcha los mecanismos para la plena aplicación del Convenio.

Somos conscientes de los esfuerzos de cooperación que realiza la OISS y de los logros obtenidos en tal sentido a efectos de poseer los mecanismos que aseguren su plena vigencia.

Un adecuado sistema de estadísticas y de información que permita la imprescindible eficiencia para la aplicación de la normativa adoptada resultan esenciales.

En suma, la cooperación entre países, más que deseo loable, es imperativo estratégico, tanto en seguridad social como en migraciones. Ello contribuye al fortalecimiento del multilateralismo y a la plena aplicación del derecho internacional.

10. Un gran desafío tienen por delante los países signatarios del Convenio Iberoamericano. Es necesario que la normativa sancionada se torne comprensible y creíble en la percepción de la ciudadanía, ya que tanto la legislación nacional como la comunitaria aparecen en primera instancia como muy técnica, compleja. Por tanto, de difícil comprensión.

Para lo cual, la máxima difusión posible contribuirá a tal objetivo y, en definitiva, a la aplicación del Convenio.

De los países signatarios del Convenio, depende el futuro del mismo.

### **1.3. “Ampliar la protección social a la Comunidad Iberoamericana con perspectiva globalizadora” (enero 2008)**

*Oswaldo Andrade Lara*

*Ministro de Trabajo y Previsión Social de Chile*

En su reciente intervención en Naciones Unidas, la Presidenta Michelle Bachelet planteó un noble propósito: “hay que globalizar la prosperidad”. Desde una perspectiva similar, lo que nuestros gobiernos han hecho con la reciente adopción del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, es ampliar la protección social a todo el ámbito iberoamericano.

Con ello, se está reconociendo una realidad concreta y acuciante: el mundo en que hoy nos desenvolvemos está signado por una creciente apertura comercial y una vertiginosa circulación de capitales, bienes y tecnologías, todo ello acompañado por corrientes migratorias importantes y una proporción cada vez más creciente de trabajadoras y trabajadores cuyo ámbito de referencia es el mercado de trabajo global. Iberoamérica es parte activa de este proceso, en la medida que, de manera ineluctable, se ha integrado al proceso de globalización, con todo lo que ello implica en materia de oportunidades, pero también de riesgos.

Justamente, en ese sentido, la Presidenta Bachelet, en la ceremonia inaugural de la XVII Cumbre Iberoamericana realizada en Santiago de Chile señalaba que los ciudadanos iberoamericanos “nos dicen que quieren trabajar, que quieren emprender, pero que no quieren vivir presos de la incertidumbre y que eso eche por la borda el bienestar básico de sus familias”. Esto –como sabemos– es válido tanto en el plano interno, en cada uno de nuestros países, como en el ámbito del mercado laboral global, cuando la búsqueda de nuevos horizontes obliga a nuestra gente a abandonar sus países y, con ello, los paraguas institucionales que les ofrecen protección social a escala local.

Tal como lo señalé en Iquique, en la VI Conferencia Iberoamericana de Ministros y Máximos Responsables de Seguridad Social, preparatoria a la Cumbre, en tanto Comunidad Iberoamericana estamos concretando un paso que, para algunos, puede ser modesto pero reviste una importancia trascendental. Si bien el Convenio no cubre todas las dimensiones de lo que habitualmente se considera un sistema de protección social, aborda algunas de sus columnas vertebrales, a saber: las que dicen relación con la protección para la vejez, las prestaciones económicas de invalidez, las prestaciones económicas de supervivencia y aquellas referidas a la protección de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales. Sobre esa base, se puede trabajar con perspectiva estratégica para ir alcanzando nuevos acuerdos para el futuro, que amplíen la red de protección supranacional.

Ahora bien, a nadie se le escapa que el paso a la práctica, la materialización de estas iniciativas, plantea enormes desafíos en materias administrativas, de homologación de estándares y de procedimientos, entre otros aspectos. No obstante, lo fundamental es la voluntad política expresada en Santiago por todos los Estados Miembros de la Comunidad Iberoamericana, en orden a coordinarnos para asegurar, colectivamente, un mecanismo importante de integración y de cohesión social, eje sustantivo de la Cumbre.

El realismo y el respeto de las legítimas diferencias exigen reconocer que cada país y cada sistema de Seguridad Social son fruto de una historia que es única e irrepetible. Junto con ello, es deseable y perfectamente posible generar una coordinación efectiva en materia de protección social, atendiendo al hecho –subrayado en el texto del Convenio– que más allá de nuestras diferencias, en la Comunidad Iberoamericana existe un amplio acervo de carácter cultural, económico y social.

El Convenio deja fuera de su esfera de acción a los regímenes no contributivos y a la asistencia social. Con ello, se facilita que los Estados Parte en los que estén vigentes regímenes de capitalización individual puedan



establecer mecanismos expeditos de transferencia de fondos que agilicen la percepción de prestaciones por invalidez, vejez o muerte.

Para concluir, deseo señalar que, como chilenos, sentimos una gran satisfacción con los resultados de esta XVII Cumbre Iberoamericana y con la materialización del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, tanto más cuanto ello ha tenido lugar en un contexto en que nuestro país desarrolla sus mejores y mayores esfuerzos por construir un Estado Social y Democrático de Derecho, bajo la firme conducción de nuestra Presidenta.

Cuando, como sucedió en esta Cumbre, los valores y los anhelos inspirados en la ética se abrazan con resultados concretos, crece la legitimidad de nuestro quehacer en cada uno de los Estados concurrentes, aumentan las esperanzas de nuestra gente y se potencia el trabajo en pro de nuevos objetivos de bien común.

## 2. TEXTO DEL CONVENIO MULTILATERAL IBEROAMERICANO DE SEGURIDAD SOCIAL

### 2.1. Los Estados Partes en el Presente Convenio

**CONSIDERANDO** que el trabajo es uno de los factores esenciales en el fortalecimiento de la cohesión social de las naciones y que las condiciones de seguridad social tienen una dimensión muy importante en el desarrollo del trabajo decente.

**CONSTATANDO** que el proceso actual de globalización conlleva nuevas y complejas relaciones entre los distintos Estados que implican, entre otros, una creciente interdependencia entre países y regiones como consecuencia del movimiento más fluido de bienes, servicios, capitales, comunicaciones, tecnologías y personas.

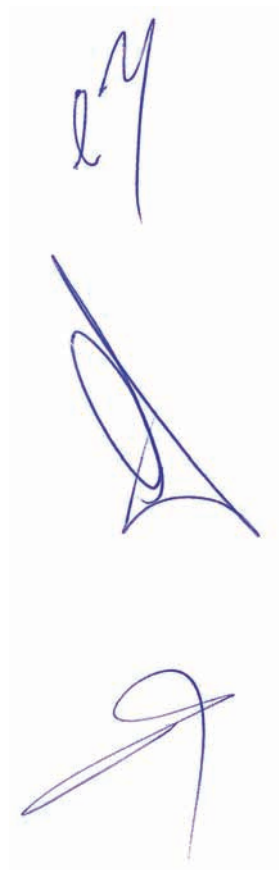
**RECONOCIENDO** que este proceso, tanto a escala global como a nivel regional, conlleva en el ámbito socio-laboral una mayor movilidad de personas entre los diferentes Estados.

**TENIENDO** en cuenta que la realidad presente aconseja promover fórmulas de cooperación en el espacio internacional que abarquen distintas actividades y, en especial, la protección social en la Comunidad Iberoamericana, en la que existe un amplio acervo común de carácter cultural, económico y social.

**CONVENCIDOS** de que esta realidad requiere también políticas sociales y económicas adecuadas que se manifiestan, entre otras, en la necesidad de que el proceso de globalización vaya acompañado de medidas tendientes a promover la coordinación normativa en materia de protección social que, sin alterar los respectivos sistemas nacionales, permitan garantizar la igualdad de trato y los derechos adquiridos o en curso de adquisición de los trabajadores migrantes y de las personas dependientes de ellos.

**AFIRMANDO** la urgencia de contar con un instrumento de coordinación de legislaciones nacionales en materia de pensiones que garantice los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias, protegidos bajo los esquemas de Seguridad Social de los diferentes Estados Iberoamericanos, con el objetivo de que puedan disfrutar de los beneficios generados con su trabajo en los países receptores.

**Han convenido lo siguiente:**



## TÍTULO I

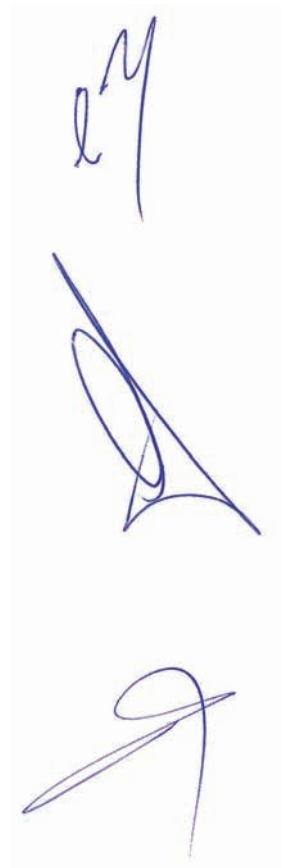
### REGLAS GENERALES Y DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

#### CAPÍTULO 1

#### DISPOSICIONES GENERALES

##### Artículo 1. *Definiciones*

1. A los efectos de la aplicación del presente Convenio, los términos y expresiones que se enumeran en este artículo tendrán el siguiente significado:
  - a) «*Actividad por cuenta ajena o dependiente*», toda actividad o situación asimilada que sea considerada como tal por la legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se ejerza o se cause la situación asimilada.
  - b) «*Actividad por cuenta propia o no dependiente*», toda actividad o situación asimilada que sea considerada como tal por la legislación de Seguridad Social del Estado Parte en el que se ejerza tal actividad o se cause la situación asimilada.
  - c) «*Autoridad Competente*», para cada Estado Parte, la autoridad que, a tal efecto, designen los correspondientes Estados Parte y que como tal sea consignada en el Acuerdo de Aplicación.
  - d) «*Comité Técnico Administrativo*» el órgano señalado en el Título IV.
  - e) «*Familiar beneficiario o derechohabiente*», la persona definida o admitida como tal por la legislación en virtud de la cual se otorguen las prestaciones.
  - f) «*Funcionario*», la persona definida o considerada como tal por el Estado del que dependa la Administración o el Organismo que la ocupe.
  - g) «*Institución Competente*», el Organismo o la Institución responsable de la aplicación de las legislaciones mencionadas en el artículo 3. Se relacionarán en el Acuerdo de Aplicación.
  - h) «*Legislación*», las leyes, reglamentos y demás disposiciones de Seguridad Social vigentes en el territorio de cada uno de los Estados Parte.
  - i) «*Nacional*», la persona definida como tal por la legislación aplicable en cada Estado Parte.



- j) «*Organismo de Enlace*», el Organismo de coordinación e información entre las Instituciones Competentes de los Estados Parte que intervenga en la aplicación del Convenio y en la información a los interesados sobre derechos y obligaciones derivados del mismo. Se relacionarán en el Acuerdo de Aplicación.
- k) «*Pensión*», prestación económica de larga duración prevista por las legislaciones mencionadas en el artículo 3 de este Convenio.
- l) «*Periodos de seguro, de cotización, o de empleo*», todo periodo definido como tal por la legislación bajo la cual ha sido cubierto o se considera como cubierto, así como todos los periodos asimilados, siempre que sean reconocidos como equivalentes a los periodos de seguro por dicha legislación.
- m) «*Prestaciones económicas*», prestación pecuniaria, pensión, renta, subsidio o indemnización, previstas por las legislaciones mencionadas en el artículo 3 de este Convenio, incluido todo complemento, suplemento o revalorización.
- n) «*Residencia*», el lugar en que una persona reside habitualmente.

2. Los demás términos o expresiones utilizadas en el Convenio tienen el significado que les atribuya la legislación aplicable.

### **Artículo 2. *Campo de aplicación personal***

El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sujetas a la legislación de uno o de varios Estados Parte, así como a sus familiares beneficiarios y derechohabientes.

### **Artículo 3. *Campo de aplicación material***

1. El presente Convenio se aplicará a toda la legislación relativa a las ramas de seguridad social relacionadas con:
  - a) las prestaciones económicas de invalidez;
  - b) las prestaciones económicas de vejez;
  - c) las prestaciones económicas de supervivencia; y,
  - d) las prestaciones económicas de accidentes de trabajo y de enfermedad profesional.

Las prestaciones médicas previstas en las legislaciones de los Estados Parte quedan excluidas del presente Convenio, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5 del presente artículo.



2. El presente Convenio se aplicará a los regímenes contributivos de seguridad social, generales y especiales. No obstante, estos últimos podrán ser exceptuados siempre que se incluyan en el Anexo I.
3. El presente Convenio no será de aplicación a las prestaciones económicas reseñadas en el Anexo II, que bajo ninguna circunstancia podrá incluir alguna de las ramas de seguridad social señaladas en el apartado 1 de este artículo.
4. El Convenio no se aplicará a los regímenes no contributivos, ni a la asistencia social, ni a los regímenes de prestaciones en favor de las víctimas de guerra o de sus consecuencias.
5. Dos o más Estados Parte del presente Convenio podrán ampliar el ámbito objetivo del mismo, extendiéndolo a prestaciones o regímenes excluidos en principio. Los acuerdos bilaterales o multilaterales mediante los que se proceda a esa extensión y los efectos de la misma se inscribirán en el Anexo III.


Las reglas correspondientes a los regímenes y/o prestaciones que hayan sido objeto de extensión, conforme a lo previsto en el apartado anterior, afectarán únicamente a los Estados que las hayan suscrito, sin que surtan efectos para los demás Estados Parte.

#### **Artículo 4. *Igualdad de trato***

Las personas a las que, conforme a lo establecido en el artículo 2, sea de aplicación el presente Convenio, tendrán derecho a los beneficios y estarán sujetas a las obligaciones establecidas en la legislación del Estado Parte en que desarrollen su actividad, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado, salvo disposición en contrario del presente Convenio.

#### **Artículo 5. *Totalización de los periodos***

Salvo disposición en contrario del presente Convenio, la Institución Competente de un Estado Parte cuya legislación condicione la admisión a una legislación, la adquisición, la conservación, la duración o la recuperación del derecho a las prestaciones, el acceso o la exención del seguro obligatorio o voluntario, al requisito de haber cubierto determinados periodos de seguro, de cotización o de empleo, tendrá



en cuenta, si fuese necesario, los periodos de seguro, de cotización o de empleo acreditados por la legislación de cualquier otro Estado Parte, como si se tratara de periodos cubiertos bajo la legislación que dicha Institución aplica y siempre que no se superpongan.

#### **Artículo 6. *Conservación de los derechos adquiridos y pago de prestaciones en el extranjero***

1. Salvo que el presente Convenio disponga otra cosa, las prestaciones económicas referidas en el artículo 3 reconocidas por la Institución Competente de un Estado Parte, no estarán sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención, excepto las que, en su caso, se deriven de los costos de transferencia, por el hecho de que el beneficiario se encuentre o resida en el territorio de otro Estado Parte, y se le harán efectivas en este último.
2. Las prestaciones reconocidas por aplicación de este Convenio a beneficiarios que residan en un tercer país, se harán efectivas en las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer país.

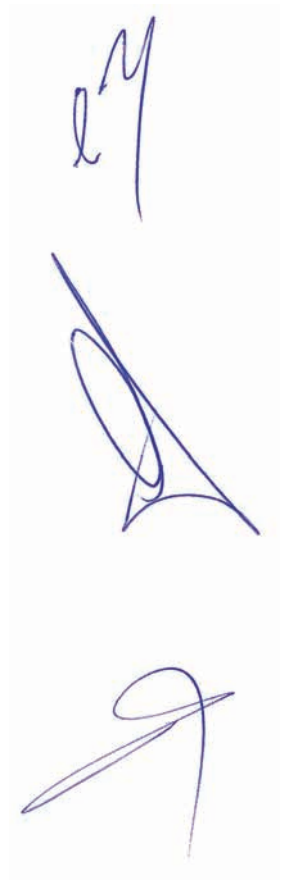
#### **Artículo 7. *Revalorización de las pensiones***

Si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o un determinado porcentaje, esa revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las prestaciones causadas al amparo del presente Convenio, teniendo en cuenta, en su caso, la regla de proporcionalidad establecida en el apartado 1 b) del artículo 13.

#### **Artículo 8. *Relaciones entre el presente Convenio y otros instrumentos de coordinación de seguridad social***

El presente Convenio tendrá plena aplicación en todos aquellos casos en que no existan convenios bilaterales o multilaterales de seguridad social vigentes entre los Estados Parte.

En los casos en que sí existan convenios bilaterales o multilaterales, se aplicarán las disposiciones que resulten más favorables al beneficiario.



Cada Estado Parte informará a la Secretaría General Iberoamericana, a través del Secretario General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), los convenios bilaterales y multilaterales que están vigentes entre ellos, la cual procederá a registrarlos en el Anexo IV de este Convenio.

Una vez vigente el presente Convenio, los Estados Parte de los convenios bilaterales o multilaterales inscritos en el Anexo IV determinarán las disposiciones más favorables de los mismos y lo comunicarán al Secretario General de la OISS.

## CAPÍTULO 2

### DETERMINACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE

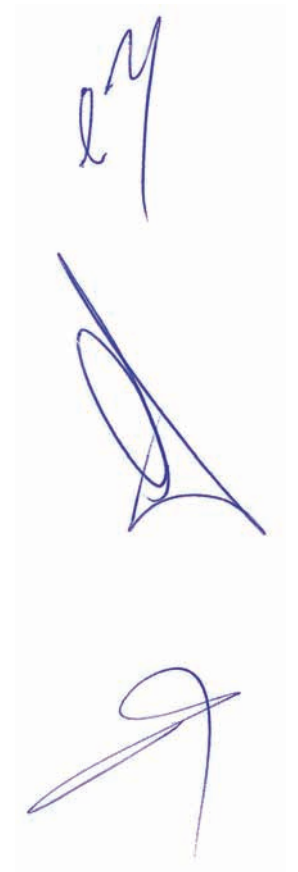
#### **Artículo 9. Regla general**

Las personas a quienes sea aplicable el presente Convenio estarán sujetas exclusivamente a la legislación de seguridad social del Estado Parte en cuyo territorio ejerzan una actividad, dependiente o no dependiente, que dé lugar a su inclusión en el ámbito de aplicación de dicha legislación, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo siguiente.

#### **Artículo 10. Reglas especiales**

A efectos de la determinación de la legislación aplicable, se establecen las siguientes reglas especiales:

- a) La persona que ejerza una actividad dependiente al servicio de una empresa con sede en el territorio de uno de los Estados Parte que desempeñe tareas profesionales, de investigación, científicas, técnicas, de dirección o actividades similares, y que sea trasladada para prestar servicios de carácter temporal en el territorio de otro Estado Parte, continuará sujeta a la legislación del Estado Parte de origen, hasta un plazo de doce meses, susceptible de ser prorrogado por un plazo similar, con carácter excepcional, previo consentimiento expreso de la Autoridad Competente del otro Estado Parte.
- b) La persona que ejerza una actividad no dependiente que realice cualquiera de las actividades indicadas en el párrafo anterior, en el territorio de un Estado Parte en el que esté asegurada, y que se traslade para ejercer tal actividad en el territorio de otro Estado Parte,



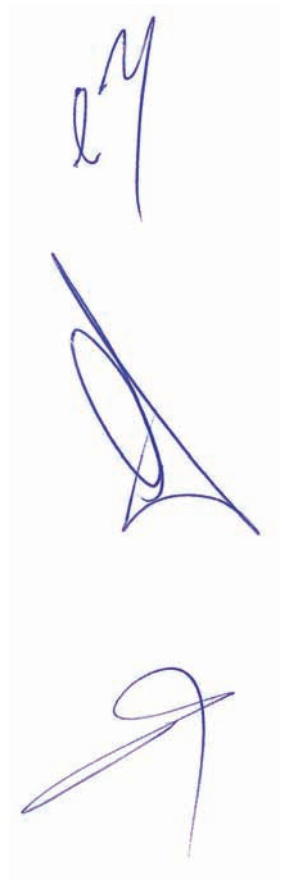
continuará sometida a la legislación del primer Estado, a condición de que la duración previsible del trabajo no exceda de doce meses y previa autorización de la Autoridad Competente del Estado de origen.

Los Estados Partes, en forma bilateral, podrán ampliar la lista de actividades sujetas a la presente regla especial, debiendo comunicarlo al Comité Técnico Administrativo.

- c) El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñe su actividad en el territorio de dos o más Estados Parte, estará sujeto a la legislación del Estado Parte en cuyo territorio tenga la empresa su sede principal.
- d) Una actividad dependiente o no dependiente que se desarrolle a bordo de un buque en el mar, que enarbole el pabellón de un Estado Parte, será considerada como una actividad ejercida en dicho Estado Parte.

Sin embargo, el trabajador que ejerza una actividad dependiente a bordo de un buque que enarbole el pabellón de un Estado Parte y que sea remunerado por esta actividad por una empresa o una persona que tenga su sede o su domicilio en otro Estado Parte, estará sujeto a la legislación de este último Estado Parte si reside en el mismo. La empresa o persona que abone la remuneración será considerada como empresario o empleador a efectos de la aplicación de la correspondiente legislación.

- e) Los trabajadores con residencia en un Estado Parte que presten servicios en una empresa pesquera mixta constituida en otro Estado Parte y en un buque abanderado en ese Estado Parte, se considerarán pertenecientes a la empresa participante del país en el que residen y, por tanto, quedarán sujetos a su legislación de seguridad social, debiendo, la citada empresa, asumir sus obligaciones como empleador.
- f) Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques y servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación del Estado Parte a cuyo territorio pertenezca el puerto.
- g) Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares se registrarán por lo establecido en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 18 de abril de 1961, y sobre Relaciones Consulares, de 24 de abril de 1963.





- h) Los funcionarios públicos de un Estado Parte, distintos a los que se refiere el apartado anterior y el personal asimilado, que se hallen destinados en el territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidos a la legislación del Estado Parte al que pertenece la Administración de la que dependen.
- i) El personal administrativo y técnico, y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de cada uno de los Estados Parte, que sean nacionales del Estado Parte acreditante y no tengan el carácter de funcionarios públicos, podrán optar entre la aplicación de la legislación del Estado acreditante o la del otro Estado Parte.

La opción se ejercerá dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación de trabajo en el territorio del Estado en el que desarrollen su actividad.

Las personas al servicio privado y exclusivo de los miembros de las Misiones Diplomáticas u Oficinas Consulares, que sean nacionales del Estado Parte acreditante, tendrán el mismo derecho de opción regulado en el párrafo anterior.

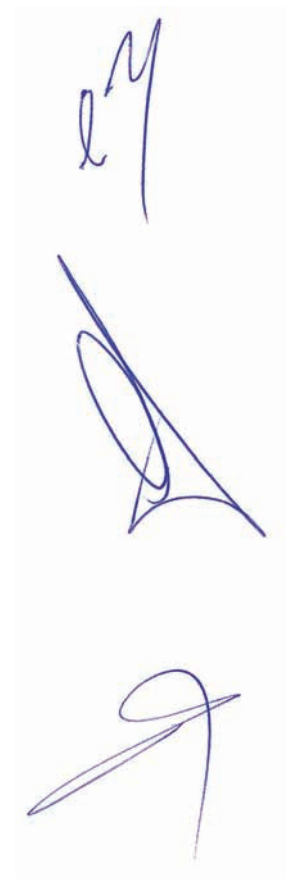
- j) Las personas enviadas por un Estado Parte, en misiones de cooperación al territorio de otro Estado Parte, quedarán sometidas a la legislación del Estado que las envía, salvo que en los acuerdos de cooperación se disponga otra cosa.

### **Artículo 11. Excepciones**

Dos o más Estados Parte, las Autoridades Competentes de esos Estados o los organismos designados por esas autoridades podrán establecer, de común acuerdo, excepciones a los artículos 9 y 10, en beneficio de determinadas personas o categorías de personas, siempre que las mismas aparezcan relacionadas en el Anexo V.

### **Artículo 12. Seguro voluntario**

En materia de pensiones, el interesado podrá ser admitido al seguro voluntario de un Estado Parte, incluso cuando esté obligatoriamente sometido a la legislación de otro Estado Parte, siempre que, con anterioridad, haya estado sometido a la legislación del primer Estado Parte por el hecho o como consecuencia del ejercicio de una actividad como trabajador dependiente o no dependiente y a condición de que dicha acumulación esté admitida en la legislación del primer Estado Parte.



## TÍTULO II

### DISPOSICIONES PARTICULARES PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE PRESTACIONES

#### CAPÍTULO 1

#### PRESTACIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SUPERVIVENCIA

#### Artículo 13. *Determinación de las prestaciones*

1. Los periodos de seguro, de cotización o de empleo cumplidos en cualquiera de los Estados Parte serán considerados para el reconocimiento de las prestaciones por invalidez, vejez y supervivencia, en las siguientes condiciones:
  - a) Cuando se reúnan las condiciones requeridas por la legislación de uno o varios Estados Parte para tener derecho a las prestaciones, sin que sea necesario recurrir a la totalización de periodos prevista en el artículo 5, la Institución o Instituciones Competentes reconocerán la prestación conforme a lo previsto en dicha legislación, considerando únicamente los periodos de seguro, de cotización o empleo cumplidos en ese Estado Parte, sin perjuicio de que el interesado pueda solicitar la totalización de los periodos cumplidos bajo otras legislaciones, en cuyo caso se aplicará el apartado siguiente.
  - b) Cuando considerando únicamente los periodos de seguro, de cotización o empleo cumplidos en un Estado Parte no se alcance el derecho a las prestaciones, el reconocimiento de éstas se hará totalizando los periodos de seguro, cotización o empleo cumplidos en otros Estados Parte.

En este supuesto, la Institución Competente determinará, en primer lugar, el importe de la prestación a la que el beneficiario tendría derecho como si todos los periodos totalizados se hubieran cumplido íntegramente bajo su propia legislación (prestación teórica) y, a continuación, establecerá el importe real de la prestación aplicando a dicho importe teórico la proporción existente entre la duración de los periodos de seguro, de cotización o empleo cumplidos, antes de producirse la contingencia, bajo la legislación del Estado Parte y los periodos totalizados (prestación real).



2. Si la legislación de un Estado Parte condiciona el reconocimiento, la conservación o la recuperación del derecho a prestaciones a que el interesado estuviera asegurado en el momento en el que éstas se generan, este requisito se entenderá cumplido cuando el interesado estuviera asegurado según la legislación o percibiera una pensión basada en sus propios periodos de seguro en otro Estado Parte. Para el reconocimiento de pensiones de supervivencia se tendrá en consideración, de ser necesario, si el sujeto causante estaba asegurado o percibía pensión de otro Estado Parte.

Si la legislación de un Estado Parte exigiera, para reconocer el derecho a una prestación, que se hayan cumplido periodos de seguro, cotización o empleo en un tiempo determinado, inmediatamente anterior al momento de causarse la prestación, tal condición se considerará cumplida cuando el interesado acredite la existencia de tales periodos en un tiempo inmediatamente anterior al de reconocimiento de la prestación en otro Estado Parte.

Si la legislación de un Estado Parte condiciona el derecho a la concesión de determinados beneficios al cumplimiento de periodos de seguro, cotización o empleo en una profesión o empleo determinados, para el reconocimiento de tales prestaciones o beneficios se tendrán en cuenta los periodos cumplidos en otro Estado Parte en una profesión o empleo similares.

3. Si la duración total de los periodos de seguro, cotización o empleo, una vez totalizados, es superior al periodo máximo requerido por la legislación de alguno de los Estados Parte para la obtención de una prestación completa, la Institución Competente de ese Estado Parte considerará el citado periodo máximo en lugar de la duración total de los periodos totalizados, a efectos del cálculo previsto en el apartado 1. b) de este artículo. Lo dispuesto anteriormente no será aplicable en el supuesto de prestaciones cuya cuantía no esté en función de los periodos de seguro, cotización o empleo.
4. Si la legislación de un Estado Parte establece que, a efectos de la determinación de la cuantía de la prestación, se tomen en consideración ingresos, cotizaciones, bases de cotización, retribuciones o una combinación de estos parámetros, la base de cálculo de la prestación se determinará tomando en consideración, únicamente, los ingresos, cotizaciones, bases de cotización o retribuciones correspondientes a los períodos de seguro, de cotización o empleo acreditados en el Estado Parte de que se trate.



5. Las cláusulas de reducción, suspensión o retención previstas por la legislación de un Estado Parte en el caso de perceptores de pensión que ejercieran una actividad laboral, serán aplicables aunque dicha actividad se ejerza en el territorio de otro Estado Parte.

#### **Artículo 14. *Periodos inferiores a un año***

1. No obstante, lo dispuesto en los artículos anteriores, cuando la duración total de los periodos de seguro, cotización o empleo, cumplidos bajo la legislación de un Estado Parte no alcance a un año y, con arreglo a la legislación de ese Estado Parte, no se adquiriera derecho a prestaciones económicas, la Institución Competente de dicho Estado Parte no reconocerá prestación económica alguna por el referido periodo.
2. Los periodos citados se tendrán en cuenta, si fuera necesario, por las Instituciones Competentes de los demás Estados Parte para el reconocimiento del derecho y la determinación de la cuantía de la pensión según su propia legislación.
3. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cuando los periodos acreditados en cada uno de los Estados Parte fueran inferiores a un año, pero totalizando los mismos fuera posible adquirir el derecho a prestaciones bajo la legislación de uno o varios Estados Partes, deberá procederse a su totalización, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 1. b)

#### **Artículo 15. *Cuantías debidas en virtud de periodos de seguro voluntario***

1. Los periodos de seguro voluntario acreditados por el trabajador en virtud de la legislación de un Estado Parte se totalizarán, si fuera necesario, con los periodos de seguro obligatorio o voluntario, cubiertos en virtud de la legislación de otro Estado Parte, siempre que no se superpongan.
2. Cuando coincidan en el tiempo periodos de seguro obligatorio con periodos de seguro voluntario, se tendrán en cuenta los periodos de seguro obligatorio. Cuando coincidan en el tiempo dos o más periodos de seguro voluntario, acreditados en dos o más Estados Parte, cada Estado tendrá en cuenta los cumplidos en su territorio.



3. No obstante, una vez calculada la cuantía teórica así como la real de la prestación económica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, la cuantía efectivamente debida será incrementada por la Institución Competente en la que se hayan cumplido los periodos de seguro voluntario en el importe que corresponda a dichos periodos de seguro voluntario que no hayan sido computados, de acuerdo con su legislación interna.
4. Cuando en un Estado Parte no sea posible precisar la época en que determinados periodos de seguro hayan sido cumplidos, se presumirá que dichos periodos no se superponen con los periodos de seguro cumplidos en otros Estados Parte.

## CAPÍTULO 2

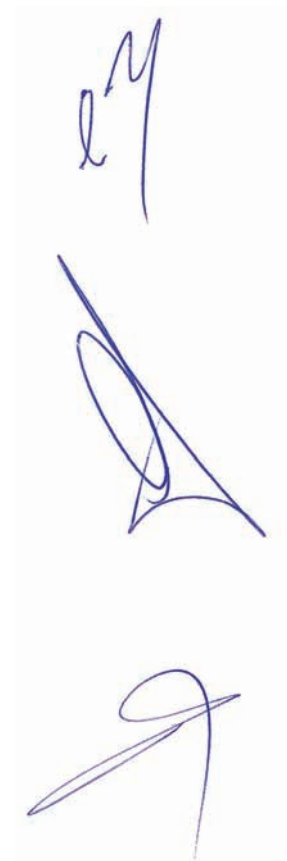
### COORDINACIÓN DE RÉGIMENES Y LEGISLACIONES BASADOS EN EL AHORRO Y LA CAPITALIZACIÓN

#### Artículo 16. *Régimen de prestaciones*

1. Cuando se trate de regímenes de capitalización individual, los afiliados a la Entidad Administradora de Fondos de Pensiones o institución similar financiarán sus pensiones con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual, en los términos establecidos en la legislación del Estado Parte de que se trate.

Si, de acuerdo a la legislación de un Estado Parte en el que se liquide la pensión se garantiza una pensión mínima, cuando la pensión generada con el saldo acumulado en la cuenta de capitalización individual fuera insuficiente para financiar pensiones de una cuantía al menos igual al de la citada pensión mínima, la institución competente del Estado Parte en el que se liquide la pensión procederá a la totalización de los periodos cumplidos en otros Estados Parte, de acuerdo al artículo 5, para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez en la proporción que corresponda, calculada de conformidad a lo dispuesto por el artículo 13. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de supervivencia.

2. Los trabajadores que se encuentren afiliados a un sistema de pensiones de capitalización individual correspondiente a un Estado Parte, podrán aportar voluntariamente en dicho sistema cotizaciones previsionales, siempre que la legislación nacional de aquél lo



permita y durante el tiempo que residan en otro Estado Parte, sin perjuicio de cumplir, además, con la legislación de este último Estado relativa a la obligación de cotizar.

### **Artículo 17. *Transferencia de fondos***

Los Estados Parte en los que estén vigentes regímenes de capitalización individual podrán establecer mecanismos de transferencia de fondos a los fines de la percepción de prestaciones por invalidez, vejez o muerte.

## **CAPÍTULO 3**

### **PRESTACIONES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y DE ENFERMEDAD PROFESIONAL**

### **Artículo 18. *Determinación del derecho a prestaciones***

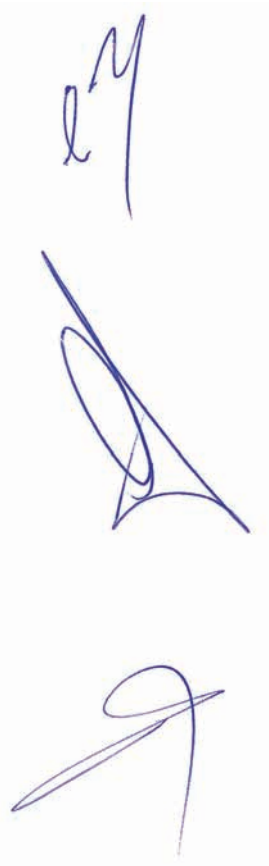
El derecho a las prestaciones derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional será determinado de acuerdo con la legislación del Estado Parte a la que el trabajador se hallase sujeto en la fecha de producirse el accidente o de contraerse la enfermedad.

## **TÍTULO III**

### **MECANISMOS DE COOPERACIÓN ADMINISTRATIVA**

### **Artículo 19. *Exámenes médico-periciales***

1. A requerimiento de la Institución Competente, los reconocimientos médicos previstos por la legislación de un Estado Parte, a efectos del acceso o mantenimiento de las correspondientes prestaciones de seguridad social, podrán ser efectuados en cualquier otro Estado Parte por la institución del lugar de residencia del solicitante o del beneficiario de las prestaciones, teniendo esta institución derecho a que se reembolsen los costos que le irrogó efectuar dichos exámenes, por parte de los obligados a su financiamiento.
2. Tales reconocimientos médicos serán financiados, en los términos que establezca el Acuerdo de Aplicación, por la Institución Competente del Estado Parte que solicitó los exámenes y/o, si así




lo determina la legislación interna, por el solicitante o beneficiario, para lo cual, la Institución Competente del Estado Parte que solicitó la evaluación médica podrá deducir el costo que le corresponde asumir al solicitante o beneficiario, de las prestaciones económicas devengadas o del saldo de su cuenta de capitalización individual, en su caso.

3. Para efectos de facilitar la evaluación a que se refiere el apartado precedente, la Institución Competente del Estado Parte en cuyo territorio reside la persona, deberá, a petición de la Institución Competente del otro Estado Parte, remitir a esta última, sin costo, cualquier informe o antecedentes médicos pertinentes que obren en su poder, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20. Esta información deberá ser utilizada exclusivamente a efectos de la aplicación del presente Convenio.

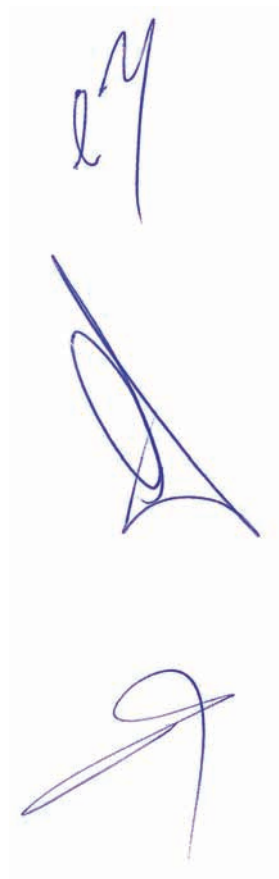
#### **Artículo 20. Intercambio de información**

1. Las Autoridades Competentes de los Estados Parte se comunicarán la información relacionada con:
  - a) las medidas adoptadas para la aplicación del presente Convenio, y
  - b) las modificaciones de sus respectivas legislaciones que puedan afectar a la aplicación del presente Convenio.
2. A efectos de la aplicación del presente Convenio, las Autoridades e Instituciones Competentes de los Estados Parte se prestarán sus buenos oficios y actuarán como si se tratase de aplicar sus propias legislaciones. La asistencia administrativa facilitada por dichas autoridades e instituciones será, por regla general, gratuita.
3. Las Instituciones Competentes, conforme el principio de buena administración, responderán a todas las peticiones en un plazo razonable y, a tal efecto, comunicarán a las personas interesadas cualquier información necesaria para hacer valer los derechos que les otorga el presente Convenio.
4. De igual modo, las personas interesadas quedan obligadas a informar cuanto antes a las instituciones del Estado Parte competente y del Estado Parte de residencia, de cualquier cambio en su situación personal o familiar que tenga incidencia en su derecho a las prestaciones establecidas en el presente Convenio.



### **Artículo 21. *Solicitudes y documentos***

1. Los documentos que se requieran para los fines del presente Convenio no necesitarán traducción oficial, visado o legalización de autoridades diplomáticas, consulares y de registro público, siempre que se hayan tramitado con la intervención de una Autoridad o Institución Competente u Organismo de Enlace.
2. La correspondencia entre las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace e Instituciones Competentes de los Estados Parte será redactada en cualquiera de los idiomas español o portugués.
3. Las solicitudes y documentos presentados ante las Autoridades o Instituciones Competentes de cualquier Estado Parte, donde el interesado acredite periodos de seguro, cotización o empleo o tenga su residencia, surtirán efecto como si se hubieran presentado ante las Autoridades o Instituciones Competentes correspondientes del otro Estado Parte, siempre que el interesado lo solicite expresamente o, si de la documentación presentada se deduce la existencia de periodos de seguro, cotización o empleo en este último Estado Parte.



### **Artículo 22. *Exenciones***

Las exenciones o reducciones de impuestos, tributos, tasas, timbres y derechos judiciales o de registro, establecidos en la legislación de un Estado Parte para la expedición de los documentos exigidos por esa misma legislación, se extenderán a la expedición de los documentos análogos exigidos por la legislación de cualquier otro Estado Parte a efectos del presente Convenio.

## **TÍTULO IV**

### **COMITÉ TÉCNICO ADMINISTRATIVO**

#### **Artículo 23. *Composición y funcionamiento del Comité Técnico Administrativo***

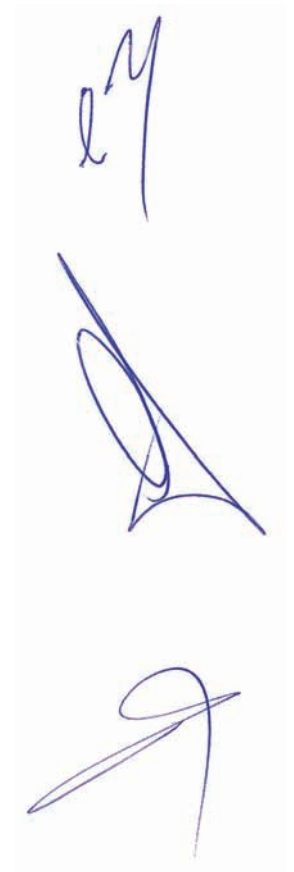
1. El Comité Técnico Administrativo estará integrado por un representante del Gobierno de cada uno de los Estados Parte, asistido, cuando sea necesario, por consejeros técnicos.

2. Los estatutos del Comité Técnico Administrativo serán establecidos, de común acuerdo, por sus miembros. Las decisiones sobre las cuestiones de interpretación serán adoptadas de acuerdo con lo que se establezca en el Acuerdo de Aplicación del presente Convenio.

#### **Artículo 24. *Funciones del Comité Técnico Administrativo***

El Comité Técnico Administrativo tendrá encomendadas las siguientes funciones:

- a) Posibilitar la aplicación uniforme del Convenio, en particular fomentando el intercambio de experiencias y de las mejores prácticas administrativas.
- b) Resolver las cuestiones administrativas o de interpretación derivadas del presente Convenio o del Acuerdo de Aplicación del mismo.
- c) Promover y desarrollar la colaboración entre los Estados Parte y sus instituciones en materia de seguridad social, especialmente para facilitar la realización de acciones encaminadas a la cooperación transfronteriza en el ámbito de la coordinación de los sistemas de seguridad social.
- d) Fomentar el uso de las nuevas tecnologías, en particular mediante la modernización de los procedimientos necesarios para el intercambio de información y la adaptación a los intercambios electrónicos del flujo de informaciones entre las Instituciones Competentes.
- e) Ejercer cualquier otra función que forme parte de sus competencias en virtud del presente Convenio y del Acuerdo de Aplicación, o de todo convenio o acuerdo que pudiere celebrarse dentro del marco de dichos instrumentos.



## **TÍTULO V**

### **DISPOSICIÓN TRANSITORIA**

#### **Artículo 25. *Disposición transitoria***

1. La aplicación del presente Convenio otorgará derecho a prestaciones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su



vigencia. No obstante, el pago de las mismas tendrá únicamente los efectos retroactivos previstos en la legislación del Estado Parte que las reconozca y no se realizará por periodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio.

Las prestaciones que hayan sido denegadas o reconocidas por uno o varios Estados Parte antes de la entrada en vigor del presente Convenio, podrán ser revisadas al amparo del mismo, a petición del interesado. El derecho se adquirirá desde la fecha de la solicitud, salvo disposición más favorable del Estado Parte que lo revise. No se revisarán las prestaciones abonadas que hayan consistido en una cantidad única.

2. Todo periodo de seguro, cotización o empleo, acreditado bajo la legislación de un Estado Parte antes de la fecha de aplicación del presente Convenio en el Estado Parte interesado, se tomará en cuenta para la determinación de los derechos originados conforme al presente Convenio.

## TÍTULO VI

### DISPOSICIONES FINALES

#### **Artículo 26. Acuerdo de Aplicación**

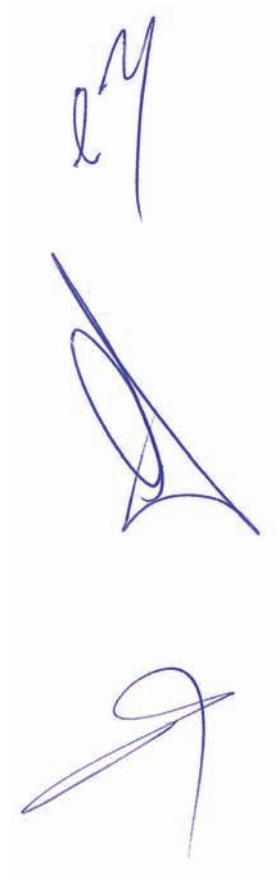
Las normas de aplicación del presente Convenio se fijarán en el Acuerdo de Aplicación correspondiente.

#### **Artículo 27. Conferencia de las Partes**

La Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, convocará una Conferencia de las Partes a más tardar un año después de la entrada en vigor del presente Convenio, con el objeto de promover y examinar la aplicación del presente Convenio y, en general, efectuar intercambio de información y experiencias.

#### **Artículo 28. Solución de controversias**

1. Los Estados Parte procurarán solucionar toda controversia relacionada con la interpretación o aplicación del presente Convenio mediante la negociación.



2. Toda controversia, entre dos o más Estados Parte, acerca de la interpretación o aplicación del presente Convenio que no pueda resolverse mediante la negociación dentro de un plazo de cuatro meses deberá, a solicitud de uno de ellos, someterse al arbitraje de una Comisión integrada por un nacional de cada Estado Parte y uno nombrado de común acuerdo, quien actuará como Presidente de la Comisión. Si, transcurridos cuatro meses después de la fecha de la solicitud de arbitraje, los Estados Parte no se han puesto de acuerdo sobre el árbitro, cualquiera de ellos podrá solicitar a la Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, que designe a dicho árbitro.

Una vez integrada la Comisión de arbitraje, ésta emitirá su decisión dentro de un plazo no mayor a cuatro meses, prorrogable por un periodo similar, siempre y cuando la Comisión justifique e informe por escrito, y antes de que culminen los cuatro meses iniciales, las razones por las cuales solicita esta prórroga.

La decisión de la Comisión será definitiva e inapelable.

#### **Artículo 29. Firma**

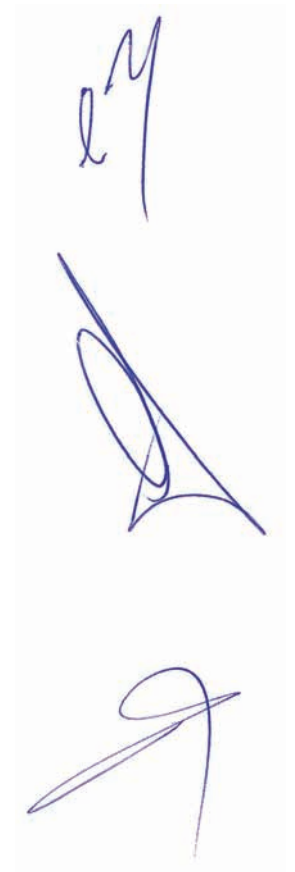
El presente Convenio estará abierto a la firma de los Estados Miembros de la Comunidad Iberoamericana.

#### **Artículo 30. Ratificación, Aceptación, Aprobación o Adhesión**

1. El presente Convenio estará sujeto a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS.
2. El presente Convenio estará abierto a la adhesión de todos los Estados que forman parte de la Comunidad Iberoamericana. Los instrumentos de adhesión se depositarán en la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS.

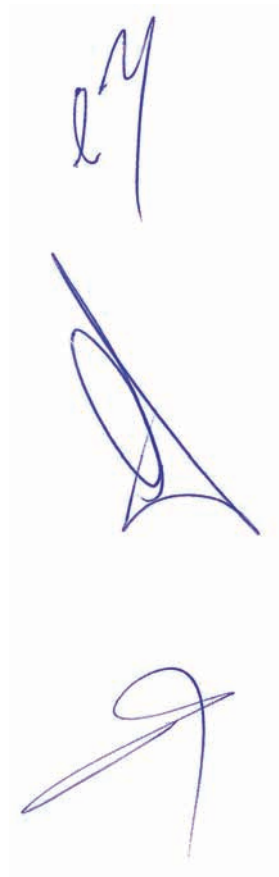
#### **Artículo 31. Entrada en vigor**

1. El Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que se haya depositado el séptimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. No obstante, éste



producirá efectos entre dichos Estados una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por los mismos.

2. Para cada Estado que ratifique o se adhiera al presente Convenio después de haberse depositado el séptimo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente a la fecha en que ese Estado haya depositado el instrumento pertinente, no obstante éste producirá efectos una vez que el Acuerdo de Aplicación sea suscrito por el mismo. La Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS comunicará dicho acto a los demás Estados Parte.



### **Artículo 32. Enmiendas**

1. La OISS recopilará las propuestas de enmiendas al Convenio que presenten los Estados Parte para los que esté vigente y a solicitud de tres de ellos, por medio de las respectivas Autoridades Competentes o pasados tres años, convocará a una Conferencia de Partes para su tratamiento.
2. Toda enmienda aprobada por la Conferencia de Partes estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación por los Estados Parte.
3. Toda enmienda refrendada de conformidad con los apartados 1 y 2 del presente artículo entrará en vigor respecto de un Estado Parte noventa días después de la fecha en que éste deposite en la Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, el instrumento de ratificación, aceptación o aprobación de esa enmienda.
4. Cuando una enmienda entre en vigor, será vinculante sólo para los Estados Parte que hayan expresado su consentimiento al respecto. Los demás Estados Parte quedarán sujetos a las disposiciones del presente Convenio, así como a cualquier otra enmienda anterior que hubiesen ratificado, aceptado o aprobado.

### **Artículo 33. Denuncia del Convenio**

1. El Convenio podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Parte, teniéndose en cuenta que la correspondiente denuncia deberá ser notificada por escrito a la Secretaría General Iberoamericana, a través de la OISS, produciendo efectos la misma, respecto de dicho Estado, a los doce meses, contados desde la fecha de su recepción.

2. En caso de denuncia, las disposiciones del presente Convenio continuarán aplicándose, en el respectivo Estado Parte, a los derechos ya reconocidos o solicitados con anterioridad.
3. Los Estados Parte podrán establecer acuerdos especiales para garantizar los derechos en curso de adquisición derivados de los periodos de seguro o equivalentes cumplidos con anterioridad a la fecha de término de la vigencia del Convenio.

#### **Artículo 34. Idiomas**

El presente Convenio se adopta en idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.

#### **Artículo 35. Depositario**

El original del presente Convenio, cuyos textos en idioma español y portugués son igualmente auténticos, se depositará en poder de la Secretaría General Iberoamericana a través de la OISS.

### **ANEXOS**

#### **ANEXOS I**

Regímenes a los que no se aplica el Convenio Multilateral  
(artículo 3, apartado 2)

#### **ANEXO II**

Prestaciones a las que no se aplican las reglas del Convenio  
Multilateral  
(artículo 3, apartado 3)

#### **ANEXO III**

Convenios suscritos entre Estados Parte del Convenio Multilateral  
mediante los que se extiende la aplicación del mismo a regímenes  
y prestaciones no comprendidos en el ámbito de aplicación  
del Convenio Multilateral  
(artículo 3, apartado 5)



#### ANEXO IV

Convenios bilaterales o multilaterales en materia de Seguridad Social,  
vigentes entre Estados Parte del Convenio Multilateral  
(artículo 8)

#### ANEXO V

Acuerdos entre Estados Parte por los que se establecen excepciones  
a la legislación aplicable según los artículos 9 y 10 del Convenio  
(artículo 11)





### 3. APRESENTAÇÕES MINISTROS DO TRABALHO

#### 3.1. “A consolidação do direito à Segurança Social dos cidadãos da Ibero-América”

*Jesús Caldera*

*Ministro do Trabalho e Assuntos Sociais de Espanha*

A partir da realização da I Cimeira Ibero-Americana de Chefes de Estado e de Governo em 1991, a consolidação dos sistemas de Segurança Social foi uma das principais preocupações manifestadas nas Declarações Finais dos sucessivos encontros, bem como nas Conferências de Ministros e Máximos Responsáveis da Segurança Social. A aprovação da Convenção Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social na última Cimeira, que teve lugar em Santiago do Chile, em outubro de 2007, e que tem a sua origem numa iniciativa do Governo de Espanha recolhida na Cimeira de Salamanca de 2005, representa o culminar dos trabalhos realizados ao longo destes anos; um trabalho que partiu da convicção de que a Segurança Social constitui um meio fundamental para melhorar a coesão social e favorecer um desenvolvimento equilibrado tanto das sociedades dos países que integram a Comunidade Ibero-americana, como da própria Comunidade.

Com efeito, esta Convenção Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social tem uma enorme transcendência política dado que fortalece o pilar social da Comunidade Ibero-Americana e dá, ainda, resposta a dois dos grandes desafios que todos os países membros da dita Comunidade têm de enfrentar nos próximos anos. Trata-se, por um lado da pobreza e da desigualdade, problemas aos quais a experiência demonstra que se faz frente de forma mais eficaz através do desenvolvimento de sistemas de protecção social.

E, por outro lado, a Convenção serve também para enfrentar o desafio da globalização e as implicações do fenómeno migratório que lhe estão associados. Neste sentido, o processo imparável da globalização, da economia da abertura comercial, da circulação de capitais e da interdependência entre países deve estar de acordo com o objetivo proposto pela OIT no seu relatório “Por uma globalização justa: criar oportunidades para todos” objetivo de preservar a dimensão social desse processo globalizador, ou seja, o de melhorar o bem-estar da população em termos de liberdade, prosperidade e segurança. Tenha-se em conta que todas as sociedades da Comunidade

Ibero-Americana são emissoras, receptoras ou ambas as coisas ao mesmo tempo de trabalhadores de outros países; assim, hoje são cerca de seis milhões as pessoas que poderão beneficiar da previdência desta Convenção, mas o incremento previsível da mobilidade de trabalhadores como consequência da referida globalização assegura um campo de aplicação muito mais amplo num futuro próximo.

A fórmula concebida para fazer face a ambos os desafios consista em coordenar as legislações sobre Segurança Social dos diferentes países da Comunidade Ibero-Americana, de forma que, preservando as legislações nacionais, se dá cobertura aos trabalhadores migrantes e às suas famílias e se garante o direito às prestações económicas de Segurança Social, nas suas deslocações dentro desse espaço Ibero-Americano. Tudo isto sem prejuízo da aplicação preferente de outras previdências mais favoráveis contidas em convénios bilaterais.

Deste modo, congue-se um duplo objetivo de grande impacto social: primeiro, incrementar o grau de protecção social de dos trabalhadores, garantir que conservam os seus direitos apesar da sua carreira profissional se desenvolver em países diferentes, o que se reflecte positivamente na coesão das sociedades Ibero-Americanas; e, segundo, melhorar a qualidade do emprego, um “trabalho decente” que serve para satisfazer de forma efectiva as necessidades económicas e familiares básicas pois é um estímulo para a redução do trabalho informal, estigma que afecta particularmente as mulheres.

Como instrumento de coordenação das legislações nacionais sobre Segurança Social que assegure os direitos dos trabalhadores migrantes e das suas famílias, el nova Convenção aplica-se às prestações económicas de “invalidez”, “velhice”, “sobrevivência”, bem como àquelas devidas a “accidentes de trabalho e doenças profissionais”. E a sua articulação inspira-se nos seguintes princípios básicos: primeiro, a igualdade de tratamento, garantindo aos trabalhadores migrantes as mesmas condições que aos nacionais do Estado receptor; segundo, a totalização dos períodos contributivos em qualquer um dos Estados da Comunidade, assegurando uma prestação futura aos trabalhadores que exerçam a sua actividade em diferentes países Ibero-Americanos; terceiro, a conservação dos direitos adquiridos com o consequente pagamento das prestações, sem prejuízo das mudanças de Estado de residência; e, por último, a garantia da revalorização das pensões, quando assim esteja previsto na legislação de um dos Estados nos quais se tenha trabalhado.

Em suma, a assinatura da nova Convenção Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social é um acontecimento da maior relevância para a Comunidade Ibero-América no seu conjunto, porquanto reforça a dimensão política do espaço ibero-americano, facilita a cooperação, especialmente no âmbito socio-laboral entre todos eles e com isso a capacidade colectiva para fazer face aos desafios futuros. E é igualmente muito importante para cada um dos seus países membros, para as suas instituições e para as suas populações, na medida em que impulsiona o desenvolvimento económico, favorece a inclusão social, aperfeiçoa os direitos dos trabalhadores e incrementa o nível de bem-estar dos cidadãos. É o primeiro passo para os dotar de direitos como cidadãos ibero-americanos independentemente da sua origem ou lugar de residência. Constitui por isso um marco no caminho para dar um rosto humano à globalização.

### **3.2. “Reflexões sobre a aprovação Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social”**

***Eduardo Bononi***

***Ministro do Trabalho e S. Social do Uruguay***

***Dr. Jorge Bruni***

***Vice-Ministro do Trabalho e S. Social do Uruguay***

Daos as boas-vindas à aprovação em Santiago do Chile, em novembro de 2007, da Convenção Ibero-Americana de Segurança Social, por vários motivos:

1. Porque contribui para promover un processo de consolidação do espaço ibero-americano a partir da perspectiva da diversidade.
2. Porque numa época de plena globalização, de crescente interdependência entre países e regiões, e de maior mobilidade de pessoas, é quando mais se observa que o trabalho e a segurança social são conceitos centrais de qualquer sociedade que pretenda e equidade, a coesão social e a governabilidade democrática. É através de varias disposições da Convenção que se recolhe este objetivo. Definitivamente, nela se reflecte a natureza de Direitos Humanos Fundamentais do Trabalho e da Segurança Social.
3. O fenómeno migratório, que constitui uma das motivações fundamentais da Convenção Ibero-Americana, não é um

processo linear, mas de ida e volta, ou pelo menos assim o deveria ser. Quase dois séculos de historia independente do nosso continente o demostram. Por outro lado, é por demais complexo, com arestas várias que devem ser analisadas em profundidade. Envolve-nos a todos, intensifica-se e diversifica-se, dizia-se em Salamanca, estabelecendo-se no pronto 7 da Declaração Final: «as migrações envolvem de forma intensa, diversa e complexa todas as sociedades pelas suas consequências na configuração política, económica, e cultural das mesmas, razão pela qual se considera conveniente a concepção de um quadro normativo para canalizar adequadamente os fluxos migratórios».

4. Uma das facetas do fenómeno ressalta claramente da convicção expressada pelos Ministros do Trabalho Ibero-Americanos, posteriormente ratificado pelos Presidentes, da importância de adoptar sociais e económicas adequadas para encarar o problema. Porque tal como existe um direito a emigrar, também se deve respeitar o daqueles que não o querem fazer, o que cria responsabilidades para os governos que devem criar as condições para que isso não suceda. Daí a importância do Trabalho Decente e da imprescindível articulação de políticas várias para o alcançar. Em Salamanca, fazia-se referência ao tema: «políticas para o desenvolvimento sustentável e combate à pobreza e desigualdade».
5. O antes mencionado não significa retirar importância à imprescindível coordenação normativa que assegure a protecção dos direitos laborais e de segurança social. Neste último caso: os princípios de igualdade de tratamento, conservação dos direitos adquiridos ou em fase de aquisição dos trabalhadores migrantes e daqueles que deles dependam. Tudo isto contribuirá para mitigar o drama que representa o desarraigamento, a vulnerabilidade social, as dificuldades de inserção laboral, etc.
6. A Convenção concretiza a vontade dos Ministros do Trabalho, no sentido da urgência de contar com um instrumento de coordenação das legislações nacionais, ao qual acrescentamos a sua plena vigência na prática. Por isso, é importante o que foi dito quanto à necessidade de iniciar o processo de negociação do Acordo de Aplicação da Convenção Ibero-Americano de Segurança, que permita a sua entrada em vigor, e quanto ao pedido de colaboração com a OISS para tal efeito. O que se ratifica com o compromisso que assumem de «impulsionar os procedimentos internos para a sua pronta entrada em vigor».

7. Para além das políticas que se estão a instrumentalizar pelos diferentes países, é indubitável que o fenómeno migratório persiste, tornando indispensável a protecção dos direitos humanos sócio-laborais, maximizando assim a contribuição da migração para o desenvolvimento e prevenindo por outro lado a de natureza clandestina.

Estima-se que mais de 20 milhões de latino-americanos vivem fora do seus país, e em cerca de 40 milhões de dólares o montante das remessas. Isto num total mundial de aproximadamente 236 milhões de dólares, dos quais 167 pertencem a países subdesenvolvidos.

Para além de possíveis imprecisões nos valores, de qualquer forma os mesmos são mais elevados que os níveis actuais da ajuda oficial de todas as nações doadoras no seu conjunto.

8. Se bem que resulta indiscutível a necessidade de garantir o direito individual dos migrante de dispor das remessas para os seus países, familiares, etc., o que sem dúvida contribui para a redução da pobreza, pelo menos familiar, isso não exclui a responsabilidade dos governos de criarem políticas que garantam o direito daqueles que não querem emigrar, fundamentalmente naqueles estados em que o fenómeno se acentua fortemente.
9. Os Ministros pronunciaram-se sobre a necessidade de fazer entrar em funcionamento os mecanismos para a plena aplicação da convenção. Estamos conscientes dos los esforços de cooperação realizados pela OISS e das conquistas obtidas nesse sentido para efeitos de possuir os mecanismos que assegurem a sua plena vigência.

Un adecuado sistema de estadísticas e de informação que permita a imprescindível eficiência para la aplicación da regulamentação adoptada resultam essenciais.

Em suma, la cooperación entre países, mais do que um desejo louvável, é um imperativo estratégico, tanto no que repeita à segurança social quanto às migrações. Esta contribui para o fortalecimento do multilateralismo e para a plena aplicação do direito internacional.

10. Os países signatários da Convenção Ibero-Americano têm pela frente um grande desafio. É necessário que a normativa sancionada se torne compreensível e credível na percepção da



ciudadanía, já que tanto a legislação nacional como a comunitária aparecem em primeira instância como muito técnicas, completas e portando de difícil compreensão.

A máxima difusão possível contribuirá para tal objetivo e decididamente para a aplicação da Conveção.

Dos países signatários da Conveção, depende o futuro da mesma.

### **3.3. “Ampliar a protecção social á comunidade ibero-americana com perspectiva globalizadora”**

*Oswaldo Andrade Lara*

*Ministro do Trabalho e Previdência Social do Chile*

Na sua recente intervenção nas Nações Unidas, a Presidenta Michelle Bachelet colocou um nobre propósito: “há que globalizar a prosperidade”. A partir de uma perspectiva semelhante, o que os nossos governos fizeram com a recente adopção da Convenção Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social, foi ampliar a protecção social a todo o âmbito ibero-americano.

Desta forma, está-se reconhecer uma realidade concreta e estimulante: o mundo em que hoje nos desenvolvemos está assinalado por uma crescente abertura comercial e uma vertiginosa circulação de capitais, bens e tecnologias, tudo isto acompanhado por importantes correntes migratórias e uma percentagem em crescente de trabalhadoras e trabalhadores cujo âmbito de referência é o mercado de trabalho global. Ibero-América é parte activa deste processo, na medida em que, de forma indiscutível, se integrou no processo de globalização, com tudo o que isso implica em termos de oportunidades, más também de riscos.

Precisamente nesse sentido, a Presidente Bachelet, na cerimónia inaugural da XVII Cimeira Ibero-Americana, realizada em Santiago do Chile, assinalou que os cidadãos ibero-americanos “nos dizem que querem trabalhar, que querem empreender, mas que não querem viver presos na incerteza e que isso comprometa o bem-estar básico das suas famílias”. Isso –como sabemos– é válido, tanto no plano interno, em cada um dos nossos países, como no âmbito do mercado laboral global, quando a procura de novos horizontes obriga as nossas gentes a abandonar os seus países e, com eles, os apoios institucionais que a protecção social lhes oferece à escala local.

Tal como assinalei em Iquique, na VI Conferência Ibero-Americana de Ministros e Máximos Responsáveis de Segurança Social, preparatória da Cimeira, como comunidade Ibero-americana estamos a dar um passo que, para alguns, pode ser modesto mas que reveste uma importância transcendental. Se bem que a Convenção não cobre todas as dimensões do que habitualmente se considera um sistema de protecção social, ela aborda algumas das questões centrais, a saber: as que se relacionam com a protecção para a velhice, as prestações económicas de invalidez, as prestações económicas de sobrevivência, e aquelas relacionadas com a protecção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais. Sobre essa base, pode trabalhar-se com uma perspectiva estratégica, para ir alcançando novos acordos no futuro, que ampliem a rede de protecção supranacional.

Ora bem, todos sabemos que levar à prática a materialização destas iniciativas, coloca enormes desafios em matérias administrativas, de homologação de standards e de procedimentos, entre outros aspectos. Não obstante, o fundamental é a vontade política expressa em Santiago por todos os Estados Membros de comunidade Ibero-americana, no sentido de nos coordenarmos para assegurar, colectivamente, um mecanismo importante de integração e de coesão social, eixo substantivo da Cimeira.

O realismo e o respeito pelas legítimas diferenças exigem reconhecer que cada país e cada sistema de Segurança social são fruto de uma história que é única e irrepetível. Juntamente com isto, é desejável e perfeitamente possível criar uma coordenação efectiva em matéria de protecção social, atendendo ao facto –sublinhado no texto da convenção– de que para além das nossas diferenças, na Comunidade Ibero-Americana existe uma grande herança comum de carácter cultural, económico e social.

A Convenção deixa fora da sua esfera de acção os regimes não contributivos e a assistência social. Desta forma, permite-se que os Estados Parte em que estejam vigentes regimes de capitalização individual, possam estabelecer mecanismos expeditos de transferência de fundos que agilizem o recebimento de prestações por invalidez, velhice ou morte.

Para concluir, deixo referir que, como chilenos, sentimos uma grande satisfação com os resultados desta XVII Cimeira Ibero-Americana e com a materialização da Convenção Multilateral Ibero-Americana de Segurança Social, tanto mais quanto esta teve lugar num contexto em que o nosso país desenvolve os seus melhores e maiores esforços para

construir um Estado Social e Democrático de Direito, sob a firme condução da nossa Presidente.

Quando, como sucedeu neste Cimeira, a vontade e os valores inspirados na la ética se abraçam com resultados concretos, crece a legitimidade do nosso que-fazer em cada um dos Estados concorrentes, aumentam as esperanças das nossas gentes e potencia-se o trabalho em prol de novos objectivos de bem comum.

## 4. CONVENÇÃO MULTILATERAL IBERO-AMERICANA DE SEGURANÇA SOCIAL

### 4.1. Os Estados Partes no Presente Convénio

**CONSIDERANDO** que o trabalho é um dos fatores essenciais no fortalecimento da coesão social das nações e que as condições de segurança social têm uma dimensão muito importante no desenvolvimento do trabalho decente.

**CONSTATANDO** que o processo actual de globalização conduz a novas e complexas relações entre os diferentes Estados, o que implica, entre outros aspectos, uma crescente interdependência entre países e regiões em consequência de um movimento acrescido de bens, serviços, capitais, comunicações, tecnologias e pessoas.

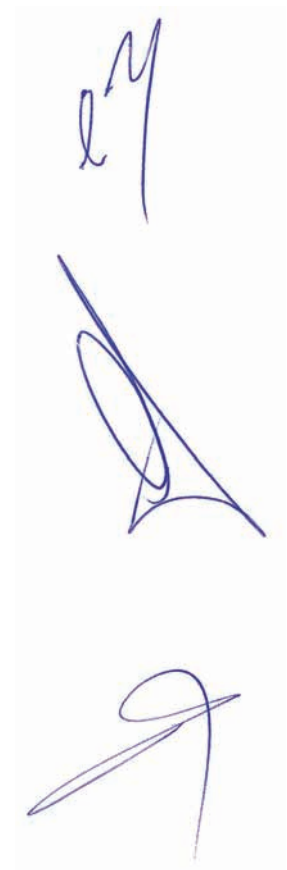
**RECONHECENDO** que este processo, tanto à escala global como a nível regional, produz, no âmbito sócio-laboral, uma maior mobilidade de pessoas entre os diferentes Estados.

**TENDO** em conta que a realidade actual aconselha promover formas de cooperação no espaço internacional que abranjam diferentes actividades e, em especial, a protecção social na Comunidade Ibero-americana, onde já existe um profundo acervo comum a nível cultural, económico e social.

**CONVENCIDOS** de que esta realidade exige igualmente políticas sociais e económicas adequadas que se manifestam, entre outros aspectos, na necessidade de que o processo de globalização seja acompanhado por medidas vocacionadas para promover a coordenação normativa em matéria de protecção social que, sem alterar os respectivos sistemas nacionais, permitam garantir a igualdade de tratamento e os direitos adquiridos ou em vias de aquisição dos trabalhadores migrantes e das pessoas que deles dependem.

**AFIRMANDO** a urgência de contar com um instrumento de coordenação das legislações nacionais em matéria de pensões que garanta os direitos dos trabalhadores migrantes e suas famílias, abrangidos pelos regimes de Segurança Social dos diferentes Estados Ibero-americanos, com o objetivo de que possam gozar dos benefícios gerados com o seu trabalho nos países receptores.

**Acordam:**



## TÍTULO I

### REGRAS GERAIS E DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

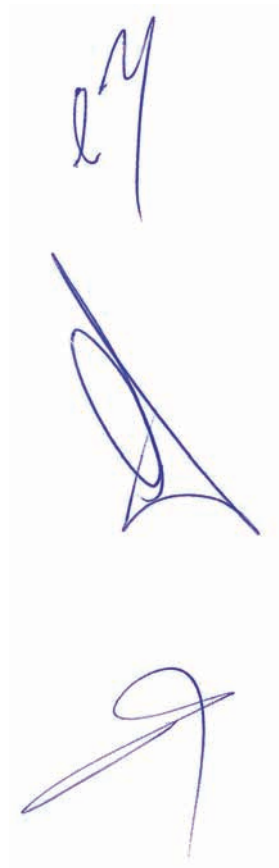
#### CAPÍTULO 1

#### DISPOSIÇÕES GERAIS

##### Artigo 1º. *Definições*

1. Para efeitos da aplicação da presente Convenção, os termos e expressões constantes do presente artigo têm o seguinte significado:

- a) «*Actividade por conta de outrem ou dependente*», qualquer actividade ou situação equiparada que seja considerada como tal pela legislação de segurança social do Estado Parte onde se exerça essa actividade ou se verifique a situação equiparada;
- b) «*Actividade por conta própria ou independente*», qualquer actividade ou situação equiparada que seja considerada como tal pela legislação de segurança social do Estado Parte onde se exerça essa actividade ou se verifique a situação equiparada;
- c) «*Autoridade Competente*», em relação a cada Estado Parte, a autoridade que, para esse efeito, seja designada pelos Estados Parte correspondentes e que como tal seja mencionada no Acordo de Aplicação;
- d) «*Comité Técnico-Administrativo*», o órgão mencionado no Título IV;
- e) «*Familiar beneficiário ou titular do direito*», a pessoa definida ou reconhecida como tal pela legislação em virtude da qual as prestações são concedidas;
- f) «*Funcionário*», a pessoa definida ou considerada como tal pelo Estado do qual dependa a administração ou o organismo que a empregue;
- g) «*Instituição Competente*», o organismo ou a instituição responsável pela aplicação das legislações mencionadas no artigo 3.º Uma relação será incluída no Acordo de Aplicação;
- h) «*Legislação*», as leis, os regulamentos e outras disposições de segurança social vigentes no território de cada um dos Estados Partes;
- i) «*Nacional*», a pessoa definida como tal pela legislação aplicável em cada Estado Parte;





- j) «*Organismo de Ligação*», o organismo de coordenação e informação entre as instituições competentes dos Estados Parte que intervenha na aplicação da Convenção e na informação aos interessados sobre direitos e obrigações derivados da mesma. Uma relação será incluída no Acordo de Aplicação;
- k) «*Pensão*», a prestação pecuniária de longa duração prevista na legislação mencionada no artigo 3.º da presente Convenção;
- l) «*Períodos de seguro, de contribuição, ou de emprego*», quaisquer períodos definidos como tal pela legislação ao abrigo da qual foram cumpridos ou se considera como cumpridos, assim como todos os períodos equiparados, sempre que sejam reconhecidos como equivalentes aos períodos de seguro pela referida legislação;
- m) «*Prestações pecuniárias*», quaisquer prestações pecuniárias, pensões, rendas, subsídios ou indemnizações, previstos nas legislações mencionadas no artigo 3.º da presente Convenção, incluindo qualquer complemento, suplemento ou revalorização;
- n) «*Residência*», o lugar onde a pessoa habitualmente reside.

2. Os restantes termos ou expressões usados na presente Convenção têm o significado que lhes for atribuído pela legislação aplicável.

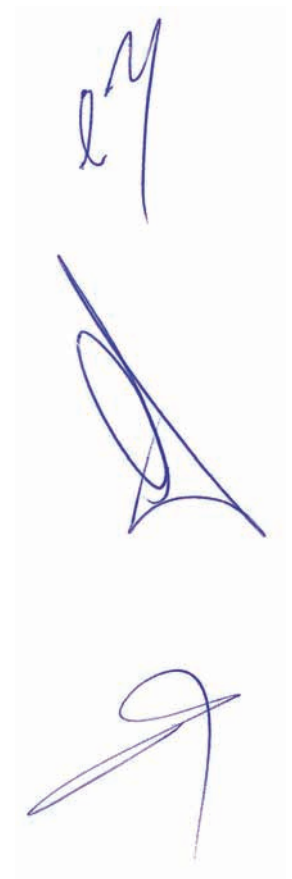
### **Artigo 2º. *Campo de aplicação pessoal***

A presente Convenção aplica-se às pessoas que estejam ou tenham estado sujeitas à legislação de um ou de vários Estados Parte, assim como aos seus familiares beneficiários e titulares do direito.

### **Artigo 3º. *Campo de aplicação material***

1. A presente Convenção aplica-se à legislação referente aos ramos de segurança social relativos:
  - a) às prestações pecuniárias por invalidez;
  - b) às prestações pecuniárias por velhice;
  - c) às prestações pecuniárias por sobrevivência; e,
  - d) às prestações pecuniárias por acidentes de trabalho e doenças profissionais.

Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do presente artigo, os cuidados de saúde previstos nas legislações dos Estados Parte não são abrangidos pela presente Convenção.



2. A presente Convenção aplica-se aos regimes contributivos de segurança social, gerais e especiais. Não obstante, estes últimos podem ser excluídos sempre que estejam incluídos no Anexo I.
3. A presente Convenção não se aplica às prestações pecuniárias inscritas no Anexo II, não podendo em circunstância alguma ser inscrita qualquer dos ramos de segurança social mencionadas no n.º 1 do presente artigo.
4. A presente Convenção não se aplica aos regimes não contributivos, nem à assistência social, nem aos regimes de prestações a favor das vítimas de guerra ou das suas consequências.
5. Dois ou mais Estados Parte da presente Convenção podem alargar o âmbito material da mesma, estendendo-o a prestações ou regimes em princípio excluídos. Os acordos bilaterais ou multilaterais através dos quais se proceda a essa extensão e os efeitos da mesma são inscritos no Anexo III.

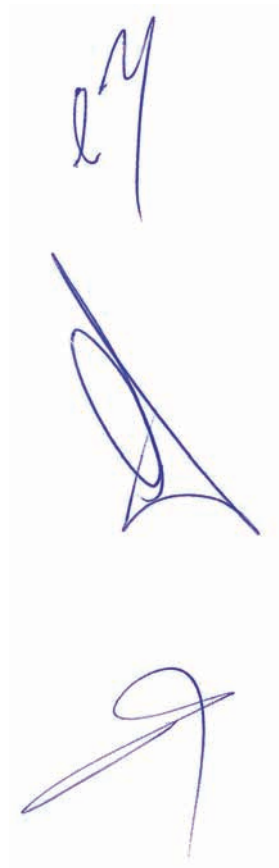
As disposições correspondentes aos regimes e/ou prestações que tenham sido objecto de extensão, conforme o previsto no parágrafo anterior, afectam unicamente os Estados que as tenham aceite, não produzindo efeitos nos restantes Estados Parte.

#### **Artigo 4º. *Igualdade de tratamento***

As pessoas às quais, em conformidade com o disposto no artigo 2º., se aplique a presente Convenção, estão sujeitas às obrigações e beneficiam da legislação do Estado Parte em que exerçam a sua actividade, nas mesmas condições que os nacionais desse Estado, salvo disposição em contrário na presente Convenção.

#### **Artigo 5º. *Totalização dos períodos***

Salvo disposição em contrário na presente Convenção, a instituição competente de um Estado Parte cuja legislação faça depender a sujeição a uma legislação, a aquisição, a conservação, a duração ou a recuperação do direito às prestações, o acesso ou a isenção do seguro obrigatório ou voluntário do cumprimento de determinados períodos de seguro, de contribuição ou de emprego, tem em conta, na medida do necessário, os períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos ao abrigo da legislação de qualquer outro Estado Parte como se se tratasse de períodos cumpridos ao abrigo da legislação que a referida instituição aplica, desde que não se sobreponham.



**Artigo 6º. *Conservação dos direitos adquiridos e pagamento de prestações no estrangeiro***

1. Salvo disposição em contrário na presente Convenção, as prestações pecuniárias mencionadas no artigo 3º. reconhecidas pela instituição competente de um Estado Parte, não estão sujeitas a redução, modificação, suspensão ou supressão, excepto as que, eventualmente, derivem das despesas de transferência pelo facto de o beneficiário se encontrar ou residir no território de outro Estado Parte e as receba neste último.
2. As prestações atribuídas por aplicação da presente Convenção a beneficiários que residam num país terceiro são pagas nas mesmas condições e em igual montante que as dos próprios nacionais que residam nesse país terceiro.

**Artigo 7º. *Revalorização das pensões***

Si, como consecuencia del aumento del costo de la vida, de la variación del nivel de ingresos u otros motivos de adaptación, la legislación de un Estado Parte revaloriza o actualiza las prestaciones, aplicando una nueva cuantía o un determinado porcentaje, esa revalorización o actualización deberá aplicarse directamente a las prestaciones causadas al amparo del presente Convenio, teniendo en cuenta, en su caso, la regla de proporcionalidad establecida en el apartado 1 b) del artículo 13º.

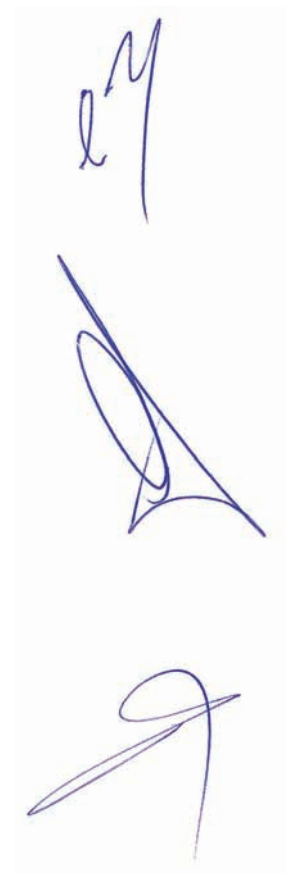
**Artigo 8º. *Relações entre a presente Convenção e outros instrumentos de coordenação de segurança social***

A presente Convenção tem plena aplicação em todos os casos em que não existam convenções bilaterais ou multilaterais sobre segurança social vigentes entre os Estados Parte.

Nos casos em que existam convenções bilaterais ou multilaterais, aplicam-se as disposições que resultem mais favoráveis para o beneficiário.

Cada Estado Parte informa a Secretaria-Geral Ibero-Americana, através do Secretário-Geral da Organização Ibero-Americana de Segurança Social (OISS), sobre as convenções bilaterais e multilaterais em vigor, a qual procede ao respectivo registo no Anexo IV da presente Convenção.

Logo que a presente Convenção esteja em vigor, os Estados Parte das convenções bilaterais ou multilaterais inscritas no Anexo IV determinam as disposições mais favoráveis das mesmas e comunicam-nas ao Secretário-Geral da OISS.



## CAPÍTULO 2

### DETERMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL

#### Artigo 9º. *Regla geral*

Sem prejuízo do disposto no artigo 10º., as pessoas às quais se aplica a presente Convenção estão sujeitas exclusivamente à legislação de segurança social do Estado Parte em cujo território exerçam uma actividade, dependente ou independente, que permita à sua inclusão no âmbito de aplicação da referida legislação.

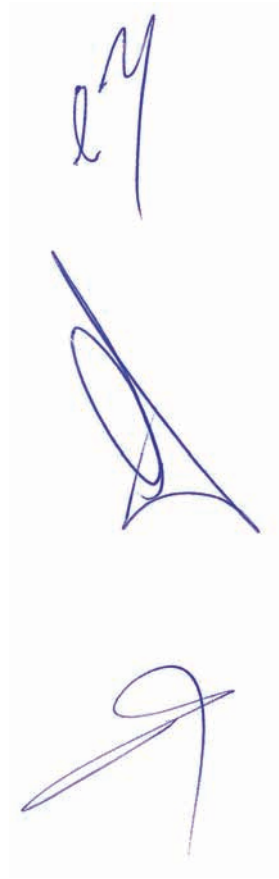
#### Artigo 10º. *Regras especiais*

Para efeito da determinação da legislação aplicável, são estabelecidas as regras especiais seguintes:

- a) A pessoa que exerça uma actividade dependente ao serviço de uma empresa com sede no território de um dos Estados Parte, que desempenhe funções profissionais, de investigação, científicas, técnicas, de direcção ou actividades similares e que seja destacada para prestar serviços de carácter temporário no território de outro Estado Parte, continua sujeita à legislação do Estado Parte de origem por um período que não exceda doze meses, susceptível de ser prorrogado por um período idêntico, com carácter excepcional, desde que a autoridade competente do outro Estado Parte tenha dado previamente o seu consentimento expresso;
- b) A pessoa que exerça uma actividade independente, que desempenhe qualquer das actividades referidas na alínea a) no território de um Estado Parte no qual esteja segurada e que se transfira para exercer essa actividade no território de outro Estado Parte, continua sujeita à legislação do primeiro Estado, na condição de a duração previsível do trabalho não exceder doze meses, desde que a autoridade competente do Estado de origem tenha dado previamente o seu consentimento;

Os Estados Parte podem alargar, de forma bilateral, a lista de actividades sujeitas à presente regra especial, devendo comunicá-lo ao Comité Técnico-Administrativo;

- c) O pessoal itinerante ao serviço de empresas de transporte aéreo que exerça a sua actividade no território de dois ou mais Estados Parte está sujeito à legislação do Estado Parte em cujo território esteja situada a sede principal da empresa;



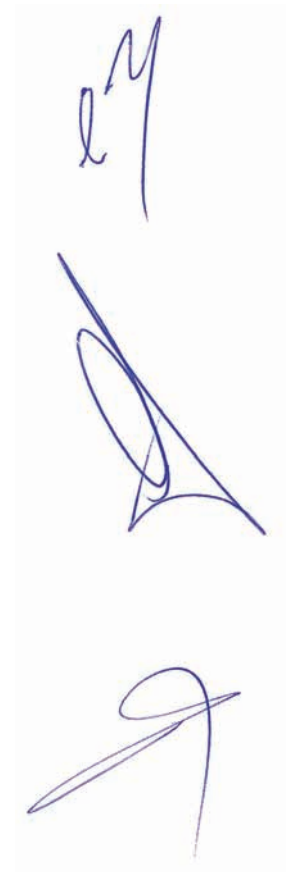
- d) Uma actividade dependente ou independente que se desenvolva a bordo de um navio no mar, que arvore a bandeira de um Estado Parte, é considerada como uma actividade exercida nesse Estado Parte.

No entanto, o trabalhador que exerça uma actividade dependente a bordo de um navio que arvore a bandeira de um Estado Parte e que seja remunerado por essa actividade por uma empresa ou uma pessoa que tenha a sua sede ou domicílio noutra Estado Parte, está sujeito à legislação deste último Estado Parte, desde que aí resida. A empresa ou pessoa que pague a remuneração é considerada como empresário ou empregador para efeitos da aplicação da respectiva legislação;

- e) Os trabalhadores que residam num Estado Parte que prestem serviço em empresa pesqueira mista constituída noutra Estado Parte e em navio com bandeira desse Estado Parte consideram-se pertencentes à empresa participante do país em que residem e, portanto, ficam sujeitos à sua legislação de segurança social, devendo a referida empresa assumir as suas obrigações como empregador;
- f) Os trabalhadores empregados em trabalhos de carga, descarga, reparação de navios e serviços de vigilância no porto estão sujeitos à legislação do Estado Parte a cujo território pertença o porto;
- g) Os membros do pessoal das missões diplomáticas e dos postos consulares regem-se pelo estabelecido na Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, de 18 de abril de 1961, e na Convenção sobre Relações Consulares, de 24 de abril de 1963;
- h) Os funcionários públicos de um Estado Parte, que não sejam os referidos na alínea g) e o pessoal equiparado, que se encontrem destacados no território de outro Estado Parte, ficam sujeitos à legislação do Estado Parte ao qual pertence a administração de que dependem;
- i) O pessoal administrativo e técnico e os membros do pessoal ao serviço das missões diplomáticas e postos consulares de cada um dos Estados Parte, que sejam nacionais do Estado Parte acreditante e não sejam funcionários públicos, podem optar entre a aplicação da legislação do Estado acreditante e a do outro Estado Parte.

A opção exerce-se nos três meses seguintes à data de início do trabalho no território do Estado em que exercem a sua actividade.

As pessoas ao serviço privado e exclusivo dos membros das missões diplomáticas ou postos consulares, que sejam nacionais do Estado Parte acreditante, têm o mesmo direito de opção a que se refere o parágrafo anterior;



- j) As pessoas enviadas por um Estado Parte em missões de cooperação ao território de outro Estado Parte ficam sujeitas à legislação do Estado que as envia, salvo disposição em contrário em acordos de cooperação.

### **Artigo 11º. Exceções**

Dois ou mais Estados Parte, as autoridades competentes desses Estados ou os organismos designados por essas autoridades podem estabelecer, de comum acordo, exceções aos artigos 9º. e 10º., em benefício de determinadas pessoas ou categorias de pessoas, sempre que as mesmas sejam inscritas no Anexo V.

### **Artigo 12º. Seguro voluntario**

Em matéria de pensões, o interessado pode beneficiar do seguro voluntário de um Estado Parte, ainda que esteja obrigatoriamente sujeito à legislação de outro Estado Parte, sempre que anteriormente já tenha estado sujeito à legislação do primeiro Estado Parte pelo facto ou em consequência do exercício de uma actividade como trabalhador dependente ou independente e na condição de a referida acumulação ser admitida na legislação do primeiro Estado Parte.

## **TÍTULO II**

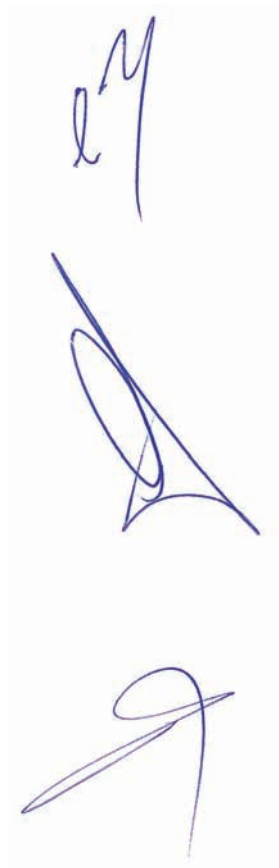
### **DISPOSIÇÕES PARTICULARES PARA AS DIFERENTES CATEGORIAS DE PRESTAÇÕES**

#### **CAPÍTULO 1**

#### **PRESTAÇÕES POR INVALIDEZ, VEJLHICE E SUBERVIVÊNCIA**

### **Artigo 13º. Determinação das prestações**

1. Os períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos em qualquer dos Estados Parte são considerados para a determinação das prestações por invalidez, velhice e sobrevivência, nas seguintes condições:
  - a) Sempre que estejam cumpridas as condições exigidas pela legislação de um ou de vários Estados Parte para beneficiar do direito às prestações, sem que seja necessário recorrer





à totalização de períodos prevista no artigo 5.º, a instituição ou instituições competentes determinam a prestação em conformidade com a referida legislação, considerando unicamente os períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos nesse Estado Parte, sem prejuízo de o interessado poder solicitar a totalização dos períodos cumpridos ao abrigo de outras legislações, caso em que se aplica o n.º 2;

- b) Quando, considerando unicamente os períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos num Estado Parte, o beneficiário não satisfaça as condições exigidas para beneficiar do direito às prestações, estas são determinadas mediante totalização dos períodos de seguro, contribuição ou de emprego cumpridos noutros Estados Parte.

Para o efeito, a instituição competente determina, em primeiro lugar, o montante da prestação à qual o beneficiário teria direito como se todos os períodos totalizados se tivessem cumprido integralmente ao abrigo da sua própria legislação (prestação teórica) e estabelece de seguida o montante efectivo da prestação, aplicando ao referido montante teórico a proporção entre a duração dos períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos, antes de se verificar a eventualidade, ao abrigo da legislação do Estado Parte e os períodos totalizados (prestação efectiva).

2. Se a legislação de um Estado Parte fizer depender a aquisição, a conservação ou a recuperação do direito a prestações da condição de o interessado ter estado segurado no momento da ocorrência do risco, essa condição é considerada preenchida quando o interessado tenha estado segurado ao abrigo da legislação ou tenha recebido uma pensão calculada com base nos períodos de seguro cumpridos noutro Estado Parte. Para efeitos de determinação de pensões de sobrevivência, tem-se em conta, se necessário, o facto de o segurado em causa ter estado segurado ou ter recebido pensão de outro Estado Parte.

Se a legislação de um Estado Parte fizer depender a determinação do direito a uma prestação da condição de terem sido cumpridos períodos de seguro, de contribuição ou de emprego num período determinado imediatamente anterior ao momento de se apurar a prestação, essa condição considera-se cumprida se o interessado provar a existência de períodos imediatamente anteriores ao da determinação da prestação noutro Estado Parte.

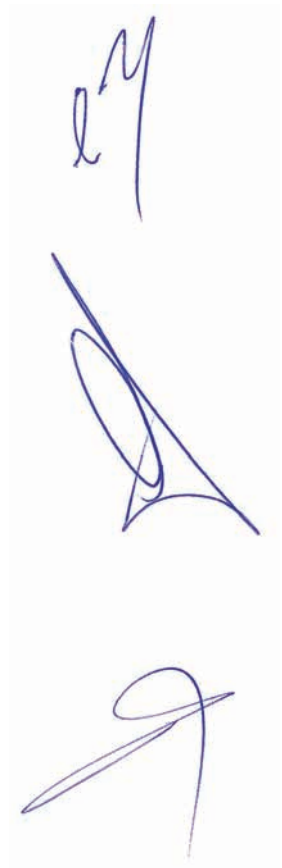
Se a legislação de um Estado Parte fizer depender o direito à concessão de determinados benefícios do cumprimento de períodos de

seguro, de contribuição ou de emprego numa profissão ou actividade determinadas, tem-se em conta, para a determinação de tais prestações ou benefícios, os períodos cumpridos noutra Estado Parte numa profissão ou actividade correspondentes.

3. Se a duração total dos períodos de seguro, de contribuição ou de emprego, uma vez totalizados, for superior ao período máximo requerido pela legislação de algum dos Estados Parte para a obtenção de uma prestação completa, a instituição competente desse Estado Parte considera, para efeitos do cálculo previsto no nº. 1, alínea b) do presente artigo, o citado período máximo em vez da duração total dos períodos totalizados. O disposto anteriormente não se aplica no caso de prestações cujo montante não esteja dependente de períodos de seguro, de cotização ou de emprego.
4. Se a legislação de um Estado Parte estabelecer que, para efeitos da determinação do montante da prestação, sejam tomados em conta rendimentos, contribuições, bases de contribuição, remunerações ou uma combinação destes parâmetros, a base de cálculo da prestação determina-se tendo em conta, unicamente, os rendimentos, contribuições, bases de contribuição ou remunerações correspondentes aos períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos no Estado Parte em causa.
5. As cláusulas de redução, suspensão ou supressão previstas na legislação de um Estado Parte no caso de titulares de pensão que exerçam uma actividade profissional, são aplicáveis mesmo que a referida actividade seja exercida no território de outro Estado Parte.

#### **Artigo 14º. *Períodos inferiores a um ano***

1. Não obstante o disposto nos artigos anteriores, quando a duração total dos períodos de seguro, de contribuição ou de emprego cumpridos ao abrigo da legislação de um Estado Parte não atinja um ano e, nos termos da legislação desse Estado Parte, não seja adquirido direito a prestações pecuniárias, a instituição competente do referido Estado Parte não concede qualquer prestação pecuniária relativa ao referido período.
2. Os períodos referidos são tidos em conta, se necessário, pelas instituições competentes dos outros Estados Parte para a aquisição do direito e a determinação do montante da pensão nos termos da sua legislação.
3. Não obstante o disposto nos números anteriores, quando os períodos cumpridos em cada um dos Estados Parte forem inferiores a um



ano, mas, totalizando os mesmos, seja possível adquirir o direito a prestações ao abrigo da legislação de um ou de vários Estados Parte, deve proceder-se à sua totalização, em conformidade com o disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º.

**Artigo 15.º. *Montantes devidas em virtude de períodos de seguro voluntário***

1. Os períodos de seguro voluntário cumpridos pelo trabalhador ao abrigo da legislação de um Estado Parte totalizam-se, se necessário, com os períodos de seguro obrigatório ou voluntário, cumpridos ao abrigo da legislação de outro Estado Parte, desde que não se sobreponham.
2. Quando coincidam no tempo períodos de seguro obrigatório com períodos de seguro voluntário, tem-se em conta os períodos de seguro obrigatório. Quando coincidam no tempo dois ou mais períodos de seguro voluntário, cumpridos em dois ou mais Estados Parte, cada Estado tem em conta os períodos cumpridos no seu território.
3. Não obstante, uma vez calculado o montante teórico, assim como o montante efectivo, da prestação pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 13.º, o montante efectivamente devido é aumentado pela instituição competente em que tenham sido cumprido os períodos de seguro voluntário no montante que corresponda aos referidos períodos de seguro voluntário que não tenham sido tidos em conta de acordo com a sua legislação interna.
4. Quando num Estado Parte não for possível precisar a época em que determinados períodos de seguro tenham sido cumpridos, presume-se que os referidos períodos não se sobreponem com os períodos de seguro cumpridos noutros Estados Parte.



## CAPÍTULO 2

### COORDINAÇÃO DE REGIMES E LEGISLAÇÕES BASEADOS NA POUPANÇA E NA CAPITALIZAÇÃO

**Artigo 16.º. *Regimes de prestações***

1. Quando se trate de regimes de capitalização individual, os inscritos na Entidade Administradora de Fundos de Pensões ou instituição

da mesma natureza, financiam as suas pensões com o saldo acumulado na sua conta de capitalização individual, nos termos estabelecidos na legislação do Estado Parte em causa.

Se, de acordo com a legislação de um Estado Parte no qual é paga a pensão, for garantida uma pensão mínima, quando a pensão resultante do saldo acumulado na conta de capitalização individual for insuficiente para financiar pensões de um montante pelo menos igual ao da referida pensão mínima, a instituição competente do Estado Parte onde se paga a pensão procede à totalização dos períodos cumpridos noutros Estados Parte, de acordo com o artigo 5.º, para aceder ao benefício de pensão mínima de velhice ou invalidez, na proporção correspondente, calculada em conformidade com o disposto no artigo 13.º Igual direito têm os beneficiários de pensão de sobrevivência.

2. Os trabalhadores que se encontrem inscritos num sistema de pensões de capitalização individual de um Estado Parte podem contribuir voluntariamente para o referido sistema de contribuições, desde que a legislação nacional desse Estado o permita e durante o tempo em que residam noutro Estado Parte, sem prejuízo do cumprimento da obrigação de efectuar contribuições nos termos da legislação deste último Estado.

### **Artigo 17º. *Transferencia de fundos***

Os Estados Parte nos quais vigorem regimes de capitalização individual podem estabelecer mecanismos de transferência de fundos para efeitos de concessão de prestações por invalidez, velhice ou morte.

## **CAPÍTULO 3**

### **PRESTAÇÕES DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇA PROFISSIONAL**

### **Artigo 18º. *Determinação do direito a prestações***

O direito às prestações por acidente de trabalho ou doença profissional é determinado de acordo com a legislação do Estado Parte à qual o trabalhador se encontra sujeito na data em que ocorre o acidente ou se verifica a doença.



## TÍTULO III

### MECANISMOS DE COOPERAÇÃO ADMINISTRATIVA

#### Artigo 19°. *Peritagens médicas*

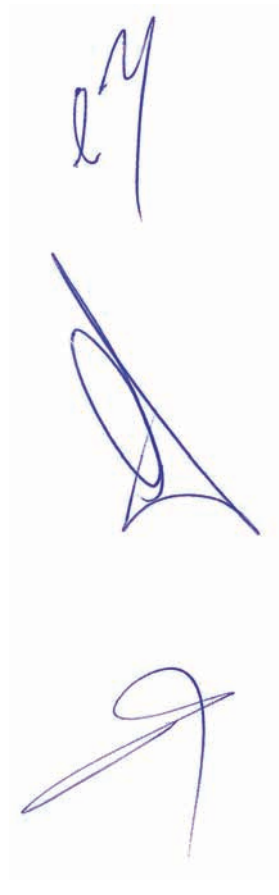
1. A pedido da instituição competente, os exames médicos previstos pela legislação de um Estado Parte para efeitos de aquisição ou manutenção das correspondentes prestações de segurança social podem ser efectuados em qualquer outro Estado Parte pela instituição do lugar de residência do requerente ou do beneficiário das prestações, tendo esta instituição direito ao reembolso, por parte da instituição competente, das despesas resultantes da realização dos referidos exames.
2. Os referidos exames médicos são financiados, nos termos estabelecidos no Acordo de Aplicação, pela instituição competente do Estado Parte que solicitou os exames e/ou, se assim o determinar a legislação interna, pelo requerente ou beneficiário, podendo a instituição competente do Estado Parte que solicitou a avaliação médica deduzir o montante que o requerente ou beneficiário deva assumir das prestações pecuniárias devidas ou, eventualmente, do saldo da conta de capitalização individual.
3. Para efeitos de facilitar a avaliação a que se refere o n.º 2, a instituição competente do Estado Parte em cujo território a pessoa reside, deve, a pedido da instituição competente do outro Estado Parte, remeter a esta última, sem encargos, qualquer relatório ou antecedente médico pertinente que tenha em seu poder, em conformidade com o disposto no artigo 20.º. Essa informação deve ser utilizada exclusivamente para efeitos da aplicação da presente Convenção.



#### Artigo 20°. *Troca de informações*

1. As autoridades competentes dos Estados Parte comunicam entre si as informações relativas:
  - a) às medidas adoptadas para efeitos de aplicação da presente Convenção; e
  - b) às alterações das respectivas legislações susceptíveis de afectar a aplicação da presente Convenção.

2. Para efeitos de aplicação da presente Convenção, as autoridades e as instituições competentes dos Estados Parte prestam entre si os seus bons ofícios e actuam como se se tratasse da aplicação das suas próprias legislações. O auxílio administrativo prestado pelas referidas autoridades e instituições é, em regra, gratuito.
3. As instituições competentes, de acordo com o princípio da boa administração, respondem a todos os pedidos num prazo razoável e, para tal efeito, comunicam às pessoas interessadas qualquer informação necessária para fazerem valer os direitos decorrentes da presente Convenção.
4. De igual forma, as pessoas interessadas ficam obrigadas a informar com brevidade as instituições do Estado Parte competente e do Estado Parte de residência sobre qualquer alteração na sua situação pessoal ou familiar que afecte o direito às prestações previstas na presente Convenção.



#### **Artigo 21º. *Requerimentos e documentos***

1. Os documentos pedidos para efeitos de aplicação da presente Convenção não necessitam de tradução oficial, visto ou legalização por parte das autoridades diplomáticas, consulares e de registo público, desde que sejam enviados através de uma autoridade ou instituição competente ou organismo de ligação.
2. A correspondência entre as autoridades competentes, organismos de ligação e instituições competentes dos Estados Parte é redigida em língua portuguesa ou espanhola.
3. Os requerimentos e documentos apresentados perante as autoridades ou instituições competentes de qualquer Estado Parte onde o interessado tenha cumprido períodos de seguro, de contribuição ou de emprego, ou tenha a sua residência, são admissíveis como se tivessem sido apresentados perante as autoridades ou instituições competentes correspondentes do outro Estado Parte, sempre que o interessado o solicite expressamente ou se da documentação apresentada se deduzir a existência de períodos de seguro, de contribuição ou de emprego neste último Estado Parte.

#### **Artigo 22º. *Isenções***

As isenções ou reduções de taxas, selos, emolumentos notariais ou de registo estabelecidos na legislação de um Estado Parte para a emissão



dos documentos exigidos por essa mesma legislação são extensivas à emissão dos documentos análogos exigidos pela legislação de qualquer outro Estado Parte para efeitos de aplicação da presente Convenção.

## TÍTULO IV

### COMITÉ TÉCNICO-ADMINISTRATIVO


#### **Artigo 23º. Composição y funcionamiento del Comité Técnico-Administrativo**

1. O Comité Técnico-Administrativo, composto por um representante do Governo de cada um dos Estados Parte, assistido, se for caso disso, por conselheiros técnicos.
2. Os estatutos do Comité Técnico-Administrativo são estabelecidos, de comum acordo, pelos seus membros. As decisões sobre as questões de interpretação são adoptadas em conformidade com o que se estabeleça no Acordo de Aplicação da presente Convenção.

#### **Artigo 24º. Atribuições do Comité Técnico-Administrativo**

Cabe ao Comité Técnico-Administrativo:

- a) Possibilitar a aplicação uniforme da presente Convenção, em particular fomentando a troca de experiências e das melhores práticas administrativas;
- b) Resolver as questões administrativas ou de interpretação decorrentes da presente Convenção ou do respectivo Acordo de Aplicação;
- c) Promover e desenvolver a colaboração entre os Estados Parte e as suas instituições em matéria de segurança social, em particular no sentido de facilitar a realização de acções que visem a cooperação transfronteiriça no âmbito da coordenação dos sistemas de segurança social;
- d) Fomentar o uso das novas tecnologias, em particular mediante a modernização dos procedimentos necessários para a troca de informação e a adaptação às trocas electrónicas do fluxo de informações entre as instituições competentes;
- e) Exercer qualquer outra função no âmbito das suas competências por força da presente Convenção e do Acordo de Aplicação ou de qualquer convenção ou acordo que venha a celebrar-se no quadro dos referidos instrumentos.



## TÍTULO V

### DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

#### **Artigo 25º. Disposições transitórias**

1. A aplicação da presente Convenção confere direito a prestações por eventualidades ocorridas antes da data da sua entrada em vigor. Não obstante, o pagamento dessas prestações tem unicamente os efeitos retroactivos previstos na legislação do Estado Parte que as concede e não se reporta a períodos anteriores à entrada em vigor da Convenção.

As prestações que tenham sido negadas ou concedidas por um ou vários Estados Parte antes da entrada em vigor da presente Convenção podem, a pedido do interessado, ser revistas ao abrigo da mesma. O direito é adquirido a partir da data do pedido, salvo disposição mais favorável do Estado Parte que proceda à revisão. As prestações de montante único liquidadas não são passíveis de revisão.

2. Qualquer período de seguro, de contribuição ou de emprego cumprido ao abrigo da legislação de um Estado Parte antes da data de aplicação da presente Convenção no Estado Parte em causa é tido em conta para a determinação dos direitos decorrentes da presente Convenção.

## TÍTULO VI

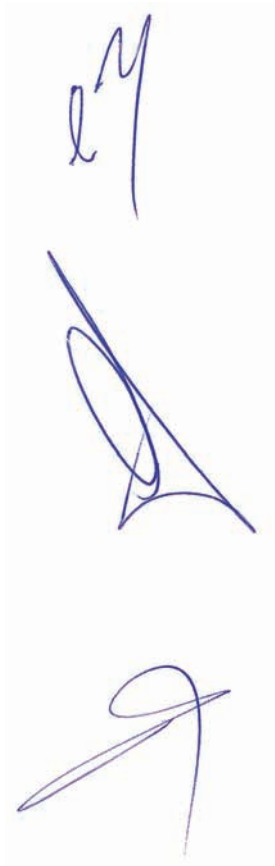
### DISPOSIÇÕES FINAIS

#### **Artigo 26º. Acordo de Aplicação**

As regras de aplicação da presente Convenção são fixadas no respectivo Acordo de Aplicação.

#### **Artigo 27º. Conferência das Partes**

A Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS, convoca uma Conferência das Partes, o mais tardar um ano após a entrada em vigor da presente Convenção, com o objectivo de promover e examinar a sua aplicação e, em termos gerais, de efectuar uma troca de informações e de experiências.



**Artigo 28º. Solução de controvérsias**

1. Os Estados Parte procurarão resolver qualquer controvérsia relacionada com a interpretação ou aplicação da presente Convenção mediante negociação.
2. Qualquer controvérsia entre dois ou mais Estados Parte acerca da interpretação ou aplicação da presente Convenção que não possa ser resolvida mediante negociação dentro de um prazo de quatro meses deve, a pedido de um desses Estados, ser submetida à arbitragem de uma Comissão composta por um nacional de cada Estado Parte e por uma pessoa nomeada de comum acordo, a qual actua como Presidente da Comissão. Se, decorridos quatro meses após a data do pedido de arbitragem, os Estados Parte não chegarem a acordo sobre o árbitro, qualquer deles pode solicitar à Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS, que o designe.

Uma vez constituída a Comissão de arbitragem, esta emite a sua decisão dentro de um prazo que não exceda quatro meses, prorrogável por um período similar sempre que a Comissão justifique e informe por escrito, antes de decorridos os quatro meses iniciais, as razões pelas quais solicita esta prorrogação.

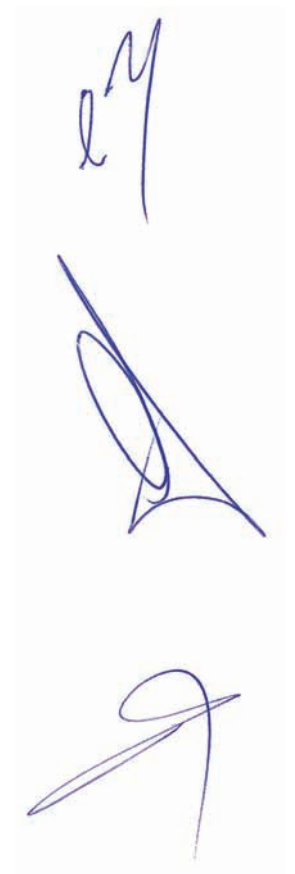
A decisão da Comissão é definitiva e obrigatória.

**Artigo 29º. Assinatura**

A presente Convenção está aberta à assinatura dos Estados-Membros da Comunidade Ibero-Americana.

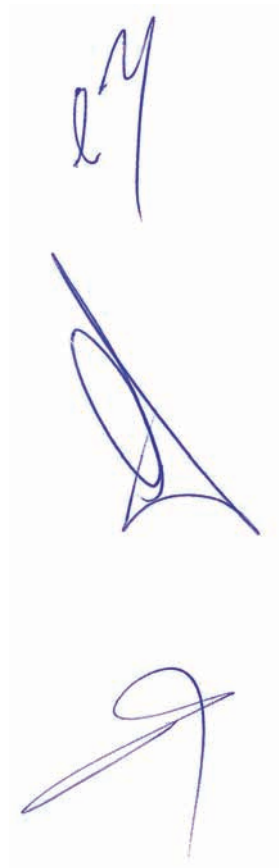
**Artigo 30º. Ratificação, Aceitação, Aprovação ou Adesão**

1. A presente Convenção está sujeita a ratificação, aceitação ou aprovação. Os instrumentos de ratificação, aceitação ou aprovação são depositados junto da Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS.
2. A presente Convenção está aberta à adesão de todos os Estados que façam parte da Comunidade Ibero-Americana. Os instrumentos de adesão são depositados junto da Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS.



### **Artigo 31°. *Entrada en vigor***

1. A Convenção entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data em que tenha sido depositado o sétimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. Não obstante, a Convenção só produz efeitos entre os referidos Estados quando o Acordo de Aplicação entrar em vigor para esses Estados.
2. Para cada Estado que ratifique ou adira à presente Convenção depois de ter sido depositado o sétimo instrumento de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão, esta entra em vigor no primeiro dia do terceiro mês subsequente à data em que esse Estado tenha depositado o respectivo instrumento. Não obstante, esta só produz efeitos quando o Acordo de Aplicação entrar em vigor para esse Estado. A Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS, comunica o referido acto aos restantes Estados Parte.



### **Artigo 32°. *Emendas***

1. A OISS compila as propostas de emenda à Convenção que os Estados Parte para os quais a Convenção esteja em vigor apresentem e, a pedido de três deles, por meio das respectivas autoridades competentes, ou passados três anos, convoca uma Conferência das Partes com vista à sua análise.
2. Qualquer emenda aprovada pela Conferência das Partes está sujeita à ratificação, aceitação ou aprovação pelos Estados Parte.
3. Qualquer emenda aceite de acordo com os n.ºs 1 e 2 do presente artigo entra em vigor relativamente a um Estado Parte noventa dias após a data em que este deposite na Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS, o instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação dessa alteração.
4. Quando uma emenda entrar em vigor, será vinculativa apenas para os Estados Parte que a tenham aceite expressamente. Para os restantes Estados Parte vigoram as disposições da presente Convenção, assim como qualquer outra emenda anterior que tenham ratificado, aceite ou aprovado.

### **Artigo 33°. *Denúncia da Convenção***

1. A Convenção pode ser denunciada por qualquer dos Estados Parte, devendo a denúncia ser notificada por escrito à Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS, e produzindo efeitos, relativamente

ao referido Estado, após doze meses a partir da data da recepção da notificação.

2. Em caso de denúncia, as disposições da presente Convenção continuam a aplicar-se, no respectivo Estado Parte, aos direitos anteriormente reconhecidos ou solicitados.
3. Os Estados Parte podem estabelecer acordos especiais que garantam os direitos em curso de aquisição derivados dos períodos de seguro ou equivalentes cumpridos antes da data do termo da vigência da Convenção.

### **Artigo 34°. Línguas**

A presente Convenção é adoptada nas línguas portuguesa e espanhola, fazendo ambos os textos igualmente fé.

### **Artigo 35°. Depósito**

O original da presente Convenção, cujos textos em língua portuguesa e espanhola fazem igualmente fé, fica em poder da Secretaria-Geral Ibero-Americana, através da OISS.

## **ANEXOS**

### **ANEXO I**

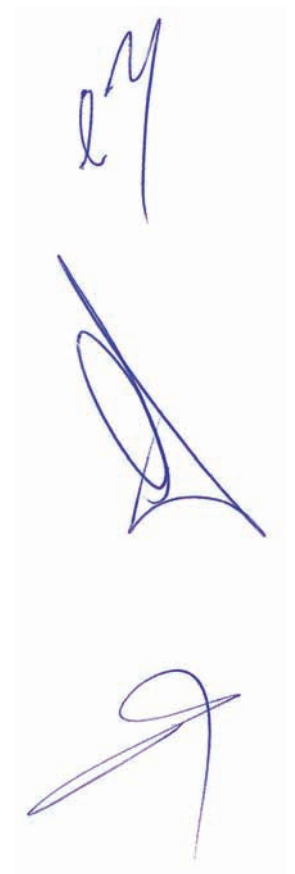
Regimes aos quais não se aplica a Convenção Multilateral  
(artigo 3º., n.º 2)

### **ANEXO II**

Prestações às quais não se aplicam as regras da Convenção  
Multilateral  
(artigo 3º., n.º 3)

### **ANEXO III**

Convenções celebradas entre Estados Parte à Convenção Multilateral  
através dos quais se estende a aplicação da mesma a regimes  
e prestações não incluídos no âmbito de aplicação  
da Convenção Multilateral  
(artigo 3º., n.º 5)



#### ANEXO IV

Convenções bilaterais ou multilaterais em matéria de segurança social em vigor entre Estados Parte à Convenção Multilateral (artigo 8.º.)

#### ANEXO V

Acordos entre Estados Parte, através dos quais se estabelecem excepções à legislação aplicável, em conformidade com o disposto nos artigos 9.º e 10.º da Convenção (artigo 11.º.)

